

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCION PORTUGUESA

I

No es corriente que en estas páginas publiquemos el texto de una Constitución, de no concurrir motivos especiales, como en su día sucedió con la de Marruecos. Ahora lo hacemos con el novísimo texto —aprobado en 16 de agosto de 1970— de la Constitución portuguesa, cuyo interés para nuestros lectores, éstos comprenderán fácilmente. Damos el texto en la lengua original, que no dudamos resulta asequible a cualquier español —portugués, castellano y catalán son las tres lenguas romance de la Península hispánica, y ninguna constituye barrera infranqueable para un peninsular— y conservamos una útil particularidad de esta versión: la distinción entre el texto primitivo, impreso en tipo corriente, y las innovaciones, impresas en «negritas» con lo que rápidamente son apreciadas por el lector.

Partiendo de la frecuente relación entre la política interior, la exterior y la internacional, en nuestros tiempos de interdependencias mundiales una Constitución no es, como en el recitado siglo XIX, un conciso enunciado de reglas orgánicas sobre las instituciones superiores de un Estado, y sobre las garantías cívicas y humanas. Ahora las Constituciones suelen ser largas, y contener mucho de programación —ideal de la vida pública del país respectivo. En su desenvolvimiento doméstico, y en sus relaciones exteriores. La Constitución portuguesa no es una excepción. Para Duverger o Biscaretti puede encasillarse concisamente como «modelo» autoritario, oscilante entre el fascismo y el paternalismo. Aunque sería más justo decir que es un modelo *sui generis*, y de ahí su mérito: original, ideada para Portugal y para los portugueses, en la circunstancia histórica en que se desenvuelven, siguiendo la pauta trazada desde 1933 por el doctor Salazar, que ha soportado en medio de grandes crisis mundiales su satisfactorio contraste con la realidad. Portugal ha progresado bajo ella. Mantiene su soberanía desde Macao y Timor a las Azores, y, dentro de esa gallarda postura, mantiene un prudente equilibrio interno, aunque sin escapar a lo que en sus días —hacia 1935— calificara Pérez Serrano de «hegemonía del Ejecutivo» fenómeno universal de una época, y no exclusivo del sistema lusitano.

Es una Constitución larga —143 artículos, algunos extensos— y detallada; un poco retórica (bien redactada) pero precisa. Algo menos larga que su versión anterior, que llegaba a los 181 artículos: «desde ya» podemos señalar que la economía de precepto se ha operado en los más casuísticos, y poco aptos para la década de los setenta, consagrados antes al Ultramar portugués. Porque Portugal tiene una Constitución básica desde el 18 de marzo de 1933, aunque la haya modificado en su pormenor muchas

veces: 23 de marzo y 23 de mayo de 1935, 21 de diciembre de 1936, 18 de diciembre de 1938, 17 de septiembre de 1945, 11 de junio de 1951, 29 de agosto de 1959 y 16 de agosto de 1970. No es el ideal —raramente alcanzable— de un texto que siga sin alteración muchos años (el español de 1876 hasta 1923), pero siempre es un texto codificado, mejor que el sistema disperso de nuestras Leyes Fundamentales, propicio a variantes de redacción poco deseables.

II

La Constitución portuguesa consta de dos partes fundamentales: De las garantías y de la organización política del Estado. La primera desborda con su contenido el título. Porque en ella, y al estilo de la española de 1812 y de muchas Constituciones lusitanas, se comienza enumerando el territorio de Portugal, sin excluir las «parcelas» que *de facto* gimen bajo un imperialismo ajeno: el de Bharat («Estado da Índia») y minúsculamente Ajudá, ocupada por Dahomey. Estado cuya política exterior sostiene un criterio viril y rotundo: se podrá compartir o combatir el criterio luso de mantener su Estado pluricontinental unitario —la ONU lo condena, con amnesias notables—, pero nadie puede desconocer la postura portuguesa, no dejar de admirar la fe y la firmeza que suponen. En las innovaciones figuran preceptos de alcance internacional, atinentes a las sedes de representaciones extranjeras, la soberanía de la nación, el vigor de las normas internacionales aceptadas, y —además del régimen republicano, unitario y corporativo— la novedad de la posible creación de «regiones autónomas», término que se dirige —como se ve en el título VII de la II parte— al Ultramar, ahora sólo provincial, al que podrá dotarse de Estatutos particularizados con la denominación «honorífica» de *Estado* (ya usada en la India) dentro de la igualdad humana sin discriminación racial u otra. También hay variantes en el título dedicado a la ciudadanía y a la larga lista de derechos cívicos del artículo 8, un tanto condicionada en su ejercicio. No hay variaciones en cuanto a la familia, organismos corporativos, «autarquías» y muy pocas en el curioso artículo 23, que sigue al que se ocupa de la opinión pública. Si se nota el influjo de las corrientes dinámicas en la promoción del progreso y en la introducción de la enseñanza obligatoria básica. Reaparece la palabra Dios, en el artículo 43, sin gran cambio en el régimen de culto. Reclámase para el dominio estatal la plataforma continental, y tras del título (inalterado) sobre defensa, innóvase el régimen de las empresas de interés colectivo, acentuando la fiscalización pública.

III

En la II parte se ha aclarado que Marcelo Caetano ha escapado juiciosamente a la tentativa cesarista de que el Presidente sea electo por sufragio universal, prácticamente plebiscitario, aunque se haya ampliado el colegio electoral. Alguna puntualización se añade sobre las facultades presidenciales, su refrendo (o exención del mismo) y las atribuciones del Consejo de Estado (más equivalente al Consejo del Reino español que al homónimo español). La Asamblea queda con 150 diputados, y en sus atribuciones se refuerza (art. 93) el ejercicio de facultades no sólo legislativas, sino de control, así como el funcionamiento de sus comisiones con mayor flexibilidad en las relaciones con el Gobierno. En la Cámara Corporativa (que no se parece en nada al Consejo Nacional español) se fomenta el funcionamiento por secciones. Notable es la potestad gubernativa de dictar decretos-leyes, y de adoptar medidas en caso de subversión que no precisa la declaración de estado de sitio (de hecho ya se han apli-

cado los artículos 91 y 109 por la acción terrorista dirigida contra la presencia de la OTAN en Lisboa). No es un régimen excepcional, sino corriente en los Estados modernos, cualquiera que sea su tendencia. Otras novedades afectan a la inconstitucionalidad de las normas (art. 123), sin que varíe el título sobre régimen local metropolitano. El que sí varía mucho es el régimen ultramarino. Se nota el deseo —vivamente controvertido por diversos sectores portugueses— de dotar de mayor autonomía al Ultramar, conservando los lazos supremos con los órganos nacionales de soberanía (art. 135 en relación con el 136). No hay nada que se refiera al desaparecido régimen de los indígenas, ni a las antiguas garantías que diferenciaban a la metrópoli y Ultramar, ahora simples partes integrantes de un todo más homogéneo. Para muchos, el *quid* de la reforma constitucional está en este aspecto: al introducir cambios en el viejo texto, se ha aprovechado la ocasión para «remendar» —pero no intrascendentemente— el resto de la arquitectura constitucional. Sin que los portugueses sean tan ingenuos que esperen de esta reforma el cese de las campañas exteriores, sino al revés: como Portugal va ganando la batalla del Ultramar (en lo militar y económico, y más lentamente en lo diplomático) ha podido poner al día su ordenamiento fundamental.

IV

Portugal, tras de Salazar, a despecho de agoreros europeos y no europeos, sigue adelante. Esta reforma constitucional, con el texto íntegro que ofrecemos a los lectores, proporciona honda base para la reflexión, y no pocas sugerencias si esos lectores son de un país que, como España, tiene tantos vínculos y semejanzas con el fraterno compañero de glorias pasadas, valeroso adelantado ya en los tiempos presentes.

J. M. C. T.

CONSTITUIÇÃO POLITICA DA REPÚBLICA PORTUGUESA *

PARTE I.

Das garantias fundamentais

TÍTULO I

Da Nação Portuguesa

Artigo 1.º O território de Portugal é o que actualmente lhe pertence e compreende:

- 1.º Na Europa: o Continente e arquipélagos da Madeira e dos Açores;
- 2.º Na Africa Ocidental: arquipélago de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe e suas dependências S. João Baptista de Ajudá, Cabinda e Angola;

* Texto de acordo com a nova publicação inserta no *Diário do Governo*, I série, n.º 198, de 23/8/71. O texto composto em tipo «negro» corresponde às alterações introduzidas pela Lei n.º 3/71, de 16 de Agosto, publicada no *Diário do Governo*, n.º 192, I série, da mesma data.

3.º Na Africa Oriental: Moçambique;

4.º Na Ásia: Estado da Índia e Macau e respectivas dependências;

5.º Na Oceania: Timor e suas dependências.

§ único. A Nação não renuncia aos direitos que tenha ou possa vir a ter sobre qualquer outro território.

Art. 2.º O Estado não aliena por nenhum modo qualquer parte do território nacional ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo da rectificação de fronteiras, quando aprovada pela Assembleia Nacional.

§ 1.º Nenhuma parcela do território nacional pode ser adquirida por Governo ou entidade de direito público de país estrangeiro, salvo para instalação de representação diplomática ou consular, se existir reciprocidade em favor do Estado Português.

§ 2.º A aquisição por Estado estrangeiro de terreno ou edifício para instalação de representação consular, nas províncias ultramarinas, será condicionada pela anuência do Governo Português à escolha do respectivo local.

Art. 3.º Constituem a Nação todos os cidadãos portugueses residentes dentro ou fora do seu território, os quais são considerados dependentes do Estado e das leis portuguesas, salvas as regras aplicáveis de direito internacional.

§ único. Os estrangeiros que se encontrem ou residam em Portugal estão também sujeitos ao Estado e às leis portuguesas, sem prejuízo do preceituado pelo direito internacional.

Art. 4.º A Nação Portuguesa constitui um Estado independente, cuja soberania, una e indivisível, só reconhece como limites a moral e o direito.

§ 1.º As normas de direito internacional vinculativas do Estado Português vigoram na ordem interna desde que constem de tratado ou de outro acto aprovado pela Assembleia Nacional ou pelo Governo e cujo texto haja sido devidamente publicado.

§ 2.º O Estado Português cooperará com outros Estados na preparação e adopção de soluções que interessem à paz entre os povos e ao progresso da Humanidade e preconiza a arbitragem como meio de dirimir os litígios internacionais.

Art. 5.º O Estado Português é unitário, podendo compreender regiões autónomas com organização político-administrativa adequada à sua situação geográfica e às condições do respectivo meio social.

§ 1.º A forma do regime é a República Corporativa, baseada na igualdade dos cidadãos perante a lei, no livre acesso de todos os portugueses aos benefícios da civilização e na participação dos elementos estruturais da Nação na política e na administração geral e local.

§ 2.º A igualdade perante a lei envolve o direito de ser provido nos cargos públicos, conforme a capacidade ou serviços prestados, e a negação de qualquer privilégio de nascimento, raça, sexo, religião ou condição social, salvas quanto ao sexo, as diferenças de tratamento justificadas pela natureza e, quanto aos encargos ou vantagens dos cidadãos, as impostas pela diversidade das circunstâncias ou pela natureza das coisas.

§ 3.º São elementos estruturais da Nação os cidadãos, as famílias, as autarquias locais e os organismos corporativos.

Art. 6.º Incumbe ao Estado:

1.º Promover a unidade e estabelecer a ordem jurídica da Nação, definindo, fazendo respeitar e assegurando o exercício dos direitos, liberdades e garantias impostos pela moral, pela justiça, ou pela lei, em favor das pessoas, das famílias, das autarquias locais e das pessoas colectivas, públicas ou privadas;

2.º Coordenar, impulsionar e dirigir todas as actividades sociais, fazendo prevalecer uma justa harmonia de interesses, dentro da legítima subordinação dos particulares ao geral;

3.º Promover o bem-estar social, procurando assegurar a todos os cidadãos um nível de vida de acordo com a dignidade humana.

TÍTULO II

Dos cidadãos

Art. 7.º A lei determina como se adquire e como se perde a qualidade de cidadão português. Este goza dos direitos, liberdades e garantias consignados na Constituição, salvas, quanto aos que não sejam naturais de origem, as restrições estabelecidas na Constituição e nas leis.

§ 1.º São privativos dos portugueses originários as funções de Presidente da República, de Conselheiro de Estado, de Deputado e de Procurador à Câmara Corporativa, de membro do Governo, de juiz dos tribunais supremos, de procurador-geral da República, de governador das províncias ultramarinas, de agente diplomático, de oficial general das forças armadas e a participação no colégio eleitoral para a designação do Presidente da República.

§ 2.º Os estrangeiros gozam em Portugal dos direitos e garantias reconhecidos pela Constituição aos Portugueses, se a lei não determinar o contrário. Exceptuam-se os direitos políticos, salvo o exercício de funções públicas com carácter predominantemente técnico, e os direitos públicos que se traduzam num encargo para o Estado, observando-se, porém, quanto aos últimos, a reciprocidade de vantagens concedidas aos súbditos portugueses por outros Estados.

§ 3.º Sob reserva de igual tratamento em favor dos portugueses no Brasil, os cidadãos brasileiros podem ser equiparados aos nacionais para o efeito do gozo de direitos, exceptuados aqueles a que se refere o § 1.º deste artigo; o exercício de direitos políticos, porém, só será permitido aos cidadãos brasileiros que tenham a sua residência principal e permanente em território português.

Art. 8.º Constituem direitos, liberdades e garantias individuais dos cidadãos portugueses:

1.º O direito à vida e integridade pessoal;

1.º-A. O direito ao trabalho, nos termos que a lei prescrever;

2.º O direito ao bom nome e reputação;

3.º A liberdade e a inviolabilidade de crenças e práticas religiosas, não podendo ninguém por causa delas ser perseguido, privado de um direito, ou isento de qualquer obrigação ou dever cívico. Ninguém será obrigado a responder acerca da religião que professa, a não ser em inquérito estatístico ordenado por lei;

4.º A liberdade de expressão do pensamento sob qualquer forma;

5.º A liberdade de ensino;

6.º A inviolabilidade do domicílio e o sigilo da correspondência, nos termos que a lei determinar;

7.º A liberdade de escolha de profissão ou género de trabalho, indústria ou comércio, salvas as restrições legais requeridas pelo bem comum e os exclusivos que só o Estado e os corpos administrativos poderão conceder nos termos da lei, por motivo de reconhecida utilidade pública;

8.º Não ser privado da liberdade pessoal, nem preso preventivamente, salvo nos casos e termos previstos nos §§ 3.º e 4.º;

9.º Não ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare puníveis o acto ou omissão, bem como não sofrer pena mais grave do que a fixada ao tempo da prática do crime, nem medida de segurança fora dos casos previstos em lei anterior;

10.º Haver instrução contraditória, dando-se aos arguidos, antes e depois da formação da culpa e para aplicação de medidas de segurança, as necessárias garantias de defesa;

11.º Não haver pena de morte, salvo no caso de beligerância com país estrangeiro e para ser aplicada no teatro da guerra, nos termos da lei penal militar, nem penas ou medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade pessoal, com carácter perpétuo, com duração ilimitada ou estabelecidas por períodos indefinidamente prorrogáveis, ressalvadas as medidas de segurança que se fundem em anomalia psíquica e tenham fim terapêutico;

12.º Não haver confisco de bens, nem transmissão de qualquer pena da pessoa do delincente;

13.º Não haver prisão por falta de pagamento de custas ou selos;

14.º A liberdade de reunião e associação;

15.º O direito de propriedade e a sua transmissão em vida ou por morte, nas condições determinadas pela lei civil;

16.º Não pagar impostos que não tenham sido estabelecidos de harmonia com a Constituição;

17.º O direito de reparação de toda a lesão efectiva conforme dispuser a lei, podendo esta, quanto a lesões de ordem moral, prescrever que a reparação seja pecuniária;

18.º O direito de representação ou petição, de reclamação ou queixa, perante os órgãos da soberania ou quaisquer autoridades, em defesa dos seus direitos ou do interesse geral;

19.º O direito de resistir a quaisquer ordens que infrinjam os direitos, liberdades e garantias individuais, se não estiverem legalmente suspensos, e de repelir pela força a agressão particular, quando não seja possível recorrer à autoridade pública;

20.º Haver revisão das sentenças criminais, assegurando-se o direito de indemnização de perdas e danos pela Fazenda Nacional, ao réu ou seus herdeiros, mediante processo que a lei regulará.

21.º Haver recurso contencioso dos actos administrativos definitivos e executórios que sejam arguidos de ilegalidade.

§ 1.º A especificação destes direitos, liberdades e garantias não exclui quaisquer outros constantes da Constituição ou das leis, entendendo-se que os cidadãos deverão sempre fazer uso deles sem ofensa dos direitos de terceiros, nem lesão dos interesses da sociedade ou dos princípios da moral.

§ 2.º Leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão de pensamento, de ensino, de reunião e de associação e da liberdade religiosa, devendo, quanto à primeira, impedir, preventiva ou repressivamente, a perversão da opinião pública na sua função de força social e salvaguardar a integridade moral dos cidadãos, a quem ficará assegurado o direito de fazer inserir gratuitamente a rectificação ou defesa na publicação periódica em que forem injuriados ou infamados, sem prejuízo de qualquer outra responsabilidade ou procedimento determinado na lei.

§ 3.º A lei poderá autorizar a prisão preventiva em flagrante delito ou por crime doloso a que corresponda pena de prisão superior a um ano. A prisão preventiva sem culpa formada está sujeita aos prazos estabelecidos na lei e só pode ser ordenada havendo forte suspeita da prática do crime.

§ 4.º Fora dos casos de flagrante delito, a prisão em cadeia pública ou detenção em domicílio privado ou estabelecimento de alienados só poderá ser levada a efeito mediante ordem por escrito de autoridade judicial ou de outras autoridades expressamente indicadas na lei, donde constem os fundamentos objectivos da prisão ou detenção. Em ambos os casos a prisão sem culpa formada deverá ser submetida a decisão de revalidação e de manutenção, ouvido o arguido nos prazos estabelecidos na lei. A prisão não sera ordenada nem será mantida quando possa ser substituída por quaisquer medidas de liberdade provisória, legalmente admitidas, que sejam suficientes para a realização dos seus fins. O não cumprimento das condições a que ficar subordinada a liberdade provisória poderá determinar a prisão preventiva do arguido.

Poderá contra o abuso do poder usarse da providência do «habeas corpus».

Art. 9.º Ninguém pode ser prejudicado na sua colocação ou emprego permanente, por virtude da obrigação de prestar o serviço militar ou em resultado de serviço na defesa civil do território.

Art. 10.º O Estado concederá distinções honoríficas ou recompensas aos cidadãos que se notabilizarem pelos seus méritos pessoais, ou pelos seus feitos cívicos ou militares, e ainda aos estrangeiros por conveniências internacionais, estabelecendo a lei as ordens, condecorações, medalhas ou diplomas a isso destinados.

Art. 11.º É vedado aos órgãos da soberania, conjunta ou separadamente, suspender a Constituição, ou restringir os direitos, liberdades e garantias nela consignados, salvo os casos na mesma previstos.

TÍTULO III

Da família

Art. 12.º O Estado assegura a constituição e defesa da família, como fonte de conservação e desenvolvimento do povo português, como base primária da educação, da disciplina e harmonia social e como fundamento da ordem política e administrativa, pela sua agregação e representação na freguesia e no município.

Art. 13.º A constituição da família assenta:

- 1.º No casamento e filiação legítima;
- 2.º Na igualdade de direitos e deveres dos dois cônjuges, quanto à sustentação e educação dos filhos legítimos;
- 3.º Na obrigatoriedade de registo do casamento e do nascimento dos filhos.

§ 1.º A lei civil estatui as normas relativas às pessoas e bens dos cônjuges, ao pátrio poder e seu suprimento, aos direitos de sucessão na linha recta ou colateral e ao direito de alimentos.

§ 2.º É garantida aos filhos legítimos a plenitude dos direitos exigidos pela ordem e solidez da família, reconhecendo-se aos ilegítimos perfilháveis, mesmo os nascituros, direitos convenientes à sua situação, em especial o de alimentos, mediante investigação, acerca das pessoas a quem incumba a obrigação de os prestar.

Art. 14.º Em ordem à defesa da família pertence ao Estado e autarquias locais:

- 1.º Favorecer a constituição de lares independentes e em condições de salubridade e a instituição do casal de família;
- 2.º Proteger a maternidade;
- 3.º Regular os impostos de harmonia com os encargos legítimos da família e promover a adopção do salário familiar;
- 4.º Facilitar aos pais o cumprimento do dever de instruir e educar os filhos, cooperando com eles por meio de estabelecimentos oficiais de ensino e correcção, ou favorecendo instituições particulares que se destinem ao mesmo fim;
- 5.º Tomar todas as providências no sentido de evitar a corrupção dos costumes.

Art. 15.º O registo do estado civil dos cidadãos é da competência do Estado.

TÍTULO IV

Dos organismos corporativos

Art. 16. Incumbe ao Estado autorizar, salvo disposição de lei em contrário, todos os organismos corporativos, morais, culturais ou económicos e promover e auxiliar a sua formação.

Art. 17.º Os organismos corporativos a que se refere o artigo anterior visarão principalmente objectivos científicos, literários, artísticos ou de educação física; de assis-

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

tência, beneficência ou caridade; de aperfeiçoamento técnico ou de solidariedade de interesses.

§ único. A constituição e funções dos mesmos organismos serão reguladas por normas especiais.

Art. 18.º Os estrangeiros domiciliados em Portugal podem fazer parte dos organismos corporativos, nos termos que a lei determinar; é-lhes, porém, vedado intervir no exercício dos direitos políticos atribuídos aos mesmos organismos.

TÍTULO V

Da família, dos organismos corporativos e das autarquias como elementos políticos

Art. 19.º Pertence privativamente às famílias o direito de eleger as juntas de freguesia.

§ único. Este direito é exercido pelo respectivo chefe.

Art. 20.º Nos organismos corporativos estarão orgânicamente representadas todas as actividades da Nação e compete-lhes participar na eleição das câmaras municipais e das juntas distritais e na constituição da Câmara Corporativa.

Art. 21.º Na organização política do Estado concorrem as juntas de freguesia para a eleição das câmaras municipais e estas para a das juntas distritais. Na Câmara Corporativa haverá representação de utarquias locais.

TÍTULO VI

Da opinião pública

Art. 22.º A opinião pública é elemento fundamental da política e administração do País, incumbindo ao Estado defendê-la de todos os factores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum.

Art. 23.º A imprensa exerce função de carácter público, por virtude da qual não poderá recusar, em assuntos de interesse nacional, a inserção de notas officiosas que lhe sejam enviadas pelo Governo. Lei especial definirá os direitos e os deveres, quer das empresas, quer dos profissionais do jornalismo, por forma a salvaguardar a independência e dignidade de umas e outros.

§ único. A radio e televisão exercem também função de carácter público.

TÍTULO VII

Da ordem administrativa

Art. 24.º Os funcionários públicos estão ao serviço da colectividade e não de qualquer partido ou organização de interesses particulares, incumbindo-lhes acatar e fazer respeitar a autoridade do Estado.

Art. 25.º Estão sujeitos à disciplina prescrita no artigo anterior os empregados e servidores das autarquias locais, dos organismos corporativos e de coordenação económica, das pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e das empresas que explorem serviços de interesse público.

Art. 26.º A suspensão concertada de serviços públicos ou de interesse colectivo importará a demissão dos delinquentes, além de outras responsabilidades que a lei prescrever.

Art. 27.º Não é permitido acumular, salvo nas condições previstas na lei, empregos do Estado ou das autarquias locais, ou daquele e destas.

§ único. regime das incompatibilidades, quer de cargos públicos, quer destes com o exercício de outras profissões, será definido em lei especial.

Art. 28.º Todos os cidadãos são obrigados a prestar ao Estado e às autarquias locais cooperação e serviços em harmonia com as leis e a contribuir, conforme os seus haveres, para os encargos públicos.

TÍTULO VIII

Da ordem económica e social

Art. 29.º A organização económica da Nação deverá realizar o máximo de produção e riqueza socialmente útil, e estabelecer uma vida colectiva de que resultem poderio para o Estado e justiça entre os cidadãos.

Art. 30.º O Estado regulará as relações da economia nacional com a dos outros países em obediência ao princípio de uma adequada cooperação, sem prejuízo das vantagens comerciais a obter especialmente de alguns ou da defesa indispensável contra ameaças ou ataques externos.

Art. 31.º O Estado tem o direito e a obrigação de coordenar e regular superiormente a vida económica e social com os objectivos seguintes:

1.º Promover o desenvolvimento económico e social do País e de cada uma das parcelas e regiões que o compõem e a justa distribuição dos rendimentos;

2.º Defender a economia nacional das explorações agrícolas, industriais e comerciais de carácter parasitário ou incompatíveis com os interesses superiores da vida humana;

3.º Conseguir o menor preço e o maior salário compatíveis com a justa remuneração dos outros factores da produção, pelo aperfeiçoamento da técnica, dos serviços e do crédito;

4.º Impedir os lucros exagerados do capital, não permitindo que este se desvie da sua finalidade humana e cristã;

5.º Desenvolver a povoação dos territórios nacionais, proteger os emigrantes e disciplinar a emigração.

6.º Estimular a iniciativa privada e a concorrência efectiva, sempre que esta contribua para a racionalização das actividades produtivas.

Art. 32.º O Estado favorecerá as actividades económicas particulares que, em relativa igualdade de custo, forem mais rendosas, sem prejuízo do benefício social atribuído e da protecção devida às pequenas indústrias domésticas.

Art. 33.º O Estado só poderá tomar a seu cargo, em regime de exclusivo ou não, actividades económicas de primacial interesse colectivo e intervir na gerência das actividades económicas particulares quando haja de financiá-las ou para conseguir benefícios sociais superiores aos que seriam obtidos sem a sua intervenção.

§ único. Ficam igualmente sujeitas à condição prevista na última parte deste artigo as explorações de fim lucrativo do Estado, ainda que trabalhem em regime de livre concorrência.

Art. 34.º O Estado promoverá a formação e desenvolvimento da economia nacional corporativa, visando a que os seus elementos não tendam a estabelecer entre si concorrência desregrada e contrária aos justos objectivos da sociedade e deles próprios, mas a colaborar mutuamente como membros da mesma colectividade.

Art. 35.º A propriedade, o capital e o trabalho desempenham uma função social, em regime de cooperação económica e solidariedade, podendo a lei determinar as condições do seu emprego ou exploração conformes com a finalidade colectiva.

Art. 36.º O trabalho, quer simples quer qualificado ou técnico, pode ser associado à empresa pela maneira que as circunstâncias aconselharem.

Art. 37.º Só os organismos corporativos de natureza económica autorizados pelo Estado podem, nos termos da lei, celebrar contratos colectivos de trabalho, os quais serão nulos sem a sua intervenção.

Art. 38.º Os litígios emergentes dos contratos individuais de trabalho serão julgados por tribunais do trabalho.

Art. 39.º Os diferendos colectivos nas relações de trabalho serão dirimidos, nos termos da lei, por conciliação ou por arbitragem, não sendo permitida a suspensão de actividade por qualquer das partes com o fim de fazer vingar os respectivos interesses.

Art. 40.º Serão dificultadas, como contrárias à economia e moral públicas, as acumulações de lugares em empresas privadas.

Art. 41.º O Estado promove e favorece as instituições de solidariedade, previdência, cooperação e mutualidade.

TÍTULO IX

Da educação, ensino e cultura nacional

Art. 42.º A educação e instrução são obrigatórias e pertencem à família e aos estabelecimentos oficiais ou particulares em cooperação com ela.

Art. 43.º O Estado procurará assegurar a todos os cidadãos o acesso aos vários graus de ensino e aos bens da cultura, sem outra distinção que não seja a resultante da capacidade e dos méritos, e manterá oficialmente estabelecimentos de ensino, de investigação e de cultura.

§ 1.º O ensino básico é obrigatório.

§ 2.º As artes e as ciências serão fomentadas e protegidas no seu desenvolvimento, ensino e propaganda, desde que sejam respeitadas a Constituição, a hierarquia e a acção coordenadora do Estado.

§ 3.º O ensino ministrado pelo Estado visa, além do revigoramento físico e do aperfeiçoamento das faculdades intelectuais, à formação do carácter, do valor profissional e de todas as virtudes morais e cívicas, orientadas aquelas pelos princípios da doutrina e moral cristãs, tradicionais do País.

§ 4.º Não depende de autorização o ensino religioso nas escolas particulares.

Art. 44.º É livre o estabelecimento de escolas particulares paralelas às do Estado, ficando sujeitas à fiscalização deste e podendo ser por ele subsidiadas, ou oficializadas para o efeito de concederem diplomas quando os seus programas e categorias do respectivo pessoal docente não forem inferiores aos dos estabelecimentos oficiais similares.

TÍTULO X

Da liberdade religiosa e das relações do Estado com a Igreja Católica e as demais confissões

Art. 45.º O Estado, consciente das suas responsabilidades perante Deus e os homens, assegura a liberdade de culto e de organização das confissões religiosas cujas doutrinas não contrariem os princípios fundamentais da ordem constitucional nem atentem contra a ordem social e os bons costumes e desde que os cultos praticados respeitem a vida, a integridade física e a dignidade das pessoas.

Art. 46.º A religião católica apostólica romana é considerada como religião tradicional da Nação Portuguesa. A Igreja Católica goza de personalidade jurídica. O regime das relações do Estado com as confissões religiosas é o de separação, sem prejuízo da existência de concordatas ou acordos com a Santa Sé.

§ único. As missões católicas portuguesas do ultramar e os estabelecimentos de formação do seu pessoal serão protegidos e auxiliados pelo Estado como instituições de ensino e de assistência e instrumentos de civilização.

Art. 47.º Nenhum templo, edificio, dependência ou objecto do culto affecto a uma religião poderá ser destinado pelo Estado a outro fim.

Art. 48.º Os cemitérios públicos têm carácter secular, podendo os ministros de qualquer religião praticar neles livremente os respectivos ritos.

TÍTULO XI

Do domínio público e privado do Estado

Art. 49.º Pertencem ao domínio público do Estado:

1.º Os jazigos minerais, as nascentes de águas mineromedicinais e outras riquezas naturais existentes no subsolo;

2.º **As águas territoriais, com os seus leitos, e a plataforma continental;**

3.º Os lagos, lagoas e cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos ou álveos, e bem assim os que, por decreto especial, forem reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis para produção de energia eléctrica, nacional ou regional, ou para irrigação;

4.º As valas abertas pelo Estado;

5.º As camadas aéreas superiores ao território, para além dos limites que a lei fixar em beneficio do proprietário do solo;

6.º As linhas férreas de interesse público de qualquer natureza, as estradas e caminhos públicos;

7.º As zonas territoriais reservadas para a defesa militar;

8.º Quaisquer outros bens sujeitos por lei ao regime do domínio público.

§ 1.º Os poderes do Estado sobre os bens do domínio público e o uso destes por parte dos cidadãos são regulados pela lei e pelas convenções internacionais celebradas por Portugal, ficando sempre ressalvados para o Estado os seus direitos anteriores e para os particulares os direitos adquiridos, podendo estes porém ser objecto de expropriação determinada pelo interesse público e mediante justa indemnização.

§ 2.º Das riquezas indicadas no n.º 1 são expressamente exceptuadas as rochas e terras comuns e os materiais vulgarmente empregados nas construções.

§ 3.º O Estado procederá à delimitação dos terrenos que, constituindo propriedade particular, confinen com bens do domínio público.

Art. 50.º A administração dos bens que estão no domínio privado do Estado pertence no Continente e Ilhas Adjacentes ao Ministério das Finanças, salvo os casos de expressa atribuição a qualquer outro.

Art. 51.º A lei especificará os bens que, por estarem no domínio público, por interessarem ao prestígio do Estado ou por outras razões de superior interesse público, não podem ser alienados.

§ único. A lei regulará também o uso ou ocupação dos mesmos bens por entidades públicas ou particulares, salvaguardando sempre o interesse público.

Art. 52.º Estão sob a protecção do Estado os monumentos artísticos, históricos e naturais, e os objectos artísticos oficialmente reconhecidos como tais, sendo proibida a sua alienação em favor de estrangeiros.

TÍTULO XII

Da defesa nacional

Art. 53.º O Estado assegura a existência e o prestígio das instituições militares de terra, mar e ar exigidas pelas supremas necessidades de defesa da integridade nacional e da manutenção da ordem e da paz pública.

§ único. A organização militar é una para todo o território.

Art. 54.º O serviço militar é geral e obrigatório. A lei determina a forma de ser prestado.

Art. 55.º A lei regulará a organização geral da Nação para o tempo de guerra, em obediência ao princípio da nação armada.

Art. 56.º O Estado promove, protege e auxilia instituições civis que tenham por fim adestrar e disciplinar a mocidade em ordem a prepará-la para o cumprimento dos seus deveres militares e patrióticos.

Art. 57.º Nenhum cidadão pode conservar ou obter emprego do Estado ou das autarquias locais, se não houver cumprido os deveres a que estiver sujeito pela lei militar.

Art. 58.º O Estado garante protecção e pensões, àqueles que se inutilizarem no serviço militar em defesa da Pátria ou da ordem, e bem assim à família dos que nele perderem a vida.

TÍTULO XIII

Das empresas de interesse colectivo e das concessões

Art. 59.º São consideradas de interesse colectivo e sujeitas a regime especial, no tocante aos seus direitos e deveres, nacionalidade, corpos gerentes, pessoal e intervenção ou fiscalização do Estado, conforme as necessidades da defesa nacional, da segurança pública e do desenvolvimento económico e social, as empresas concessionárias de serviços públicos, de obras públicas ou da exploração de coisas de domínio público do Estado, as sociedades de economia mista e de economia pública, as empresas que desempenhem alguma actividade em regime de exclusivo ou com privilégio não conferido em lei geral e ainda todas as empresas que exerçam qualquer actividade considerada por lei de interesse nacional.

Art. 60.º As concessões do Estado ou das autarquias locais, na esfera da sua competência, serão sempre sujeitas a cláusulas que assegurem, dentro do justo equilíbrio dos interesses, a salvaguarda do interesse público e o respeito das conveniências da economia nacional.

Art. 61.º As tarifas de exploração dos serviços públicos concedidos estão sujeitas à regulamentação e à fiscalização do Estado.

Art. 62.º Obedecerão a regras uniformes, sem prejuízo, em pontos secundários, das especialidades necessárias;

1.º O estabelecimento ou transformação das comunicações terrestres, fluviais, marítimas e aéreas, qualquer que seja a sua natureza ou fins;

2.º A construção das obras de aproveitamento de águas ou carvões minerais para produção de energia eléctrica, e bem assim a construção de redes para o transportê, abastecimento ou distribuição da mesma, e ainda as obras gerais de hidráulica agrícola;

3.º A exploração dos serviços públicos relativos às mesmas comunicações, obras e redes.

TÍTULO XIV

Das finanças do Estado

Art. 63.º O Orçamento Geral do Estado para o Continente e Ilhas Adjacentes é unitário, compreendendo a totalidade das receitas e despesas públicas, mesmo as dos serviços autónomos, de que podem ser publicados à parte desenvolvimentos especiais.

Art. 64.º O Orçamento Geral do Estado é anualmente organizado e posto em execução pelo Governo, em conformidade com as disposições legais em vigor e em especial con a lei de autorização prevista no n.º 4.º do artigo 91.º

Art. 65.º As despesas correspondentes a obrigações legais ou contratuais do Estado ou permanentes por sua natureza ou fins, compreendidos os encargos de juro e amortização da dívida pública, devem ser tomadas como base da fixação dos impostos e outros rendimentos do Estado.

Art. 66.º O orçamento deve consignar os recursos indispensáveis para cobrir as despesas totais.

Art. 67.º O Estado só poderá contrair empréstimos para aplicações extraordinárias em fomento económico, amortização de outros empréstimos, aumento indispensável do património nacional ou necessidades imperiosas de defesa e salvação pública.

§ único. Podem todavia, obter-se, por meio de dívida flutuante, os suprimentos necessários, em representação de receitas da gerência corrente no fim da qual deve estar feita a liquidação ou o Tesouro habilitado a fazê-la pelas suas caixas.

Art. 68.º O Estado não pode diminuir, em detrimento dos portadores dos títulos, o capital ou o juro da dívida pública fundada, podendo porém convertê-la, nos termos de direito.

Art. 69.º Não podem ser objecto de consolidação forçada os débitos por depósitos efectuados nas caixas do Estado ou nos estabelecimentos de crédito que lhe pertençam.

Art. 70.º A lei fixa os princípios gerais relativos:

- 1.º Aos impostos;
- 2.º As taxas a cobrar nos serviços públicos;
- 3.º A administração e exploração dos bens e empresas do Estado.

§ 1.º Em matéria de impostos, a lei determinará: a incidência, a taxa ou os seus limites, as isenções a que possa haver lugar, as reclamações e os recursos admitidos em favor do contribuinte.

§ 2.º A cobrança de impostos estabelecidos por tempo indeterminado ou por período certo que ultrapasse uma gerência depende, nas gerências subsequentes àquela em que foram criados, de autorização da Assembleia Nacional.

PARTE II

Da organização política do Estado

TÍTULO I

Da soberania

Art. 71.º A soberania reside em a Nação e tem por órgãos o Chefe do Estado, a Assembleia Nacional, o Governo e os Tribunais.

TÍTULO II

Do Chefe do Estado

CAPÍTULO I

Da eleição do Presidente da República e suas prerrogativas

Art. 72.º O Chefe do Estado é o Presidente da República eleito pela Nação, por intermédio de um colégio eleitoral constituído pelos membros da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa em efectividade de funções e pelos representantes municipais de cada distrito ou de cada província ultramarina não dividida em distritos e ainda pelos representantes dos órgãos electivos com competência legislativa das províncias ultramarinas.

Os representantes municipais serão designados pelas vereações eleitas nos termos da lei, a qual fixará o número que deve caber a cada distrito ou província ultramarina

em correspondência com o número das respectivas câmaras; os representantes dos órgãos electivos com competência legislativa das províncias ultramarinas serão designados por estes órgãos nos termos da lei, a qual fixará o número que deve caber a cada um deles em correspondência com o seu carácter representativo.

§ 1.º O Presidente é eleito por sete anos improrrogáveis, salvo o caso de acontecimentos que tornem impossível a reunião do colégio eleitoral, terminando nesse caso o mandato logo que tome posse o seu successor.

§ 2.º Para efeito da eleição, o colégio eleitoral reúne-se por direito próprio, sob a presidência do Presidente da Assembleia Nacional, no 15.º dia anterior ao termo de cada período presidencial.

§ 3.º A eleição recairá em candidatos propostos por um mínimo de vinte eleitores e um máximo de cinquenta.

§ 4.º A eleição far-se-á, sem prévio debate, por escrutínio secreto, considerando-se eleito e sendo como tal proclamado o candidato que no primeiro escrutínio obtiver dois terços dos votos do número legal dos membros do colégio eleitoral.

§ 5.º Se nenhum candidato obtiver a maioria prevista no parágrafo anterior, proceder-se-á a segundo escrutínio, ficando eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos a que se refere o mesmo parágrafo.

§ 6.º Havendo de proceder-se a terceiro escrutínio, será eleito o candidato que obtiver maior número de votos.

Art. 72.º-A. Se a data da eleição prevista no § 2.º do artigo anterior ocorrer depois do prazo em que devem ser apresentadas as candidaturas para nova legislatura, o colégio eleitoral reunir-se-á depois de eleita a nova Assembleia Nacional, realizando-se a eleição no 15.º dia posterior ao início do mandato dos novos Deputados.

Se a mesma hipótese se verificar em seguida à dissolução da Assembleia Nacional, a eleição presidencial deverá realizar-se no 30.º dia posterior ao encerramento das operações eleitorais.

Art. 73.º Só pode ser eleito Presidente da República o cidadão português maior de 35 anos, no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, que tenha tido sempre a nacionalidade portuguesa.

§ único. Se o eleito for membro da Assembleia Nacional ou da Câmara Corporativa perderá o mandato.

Art. 74.º São inelegíveis para o cargo de Presidente da República os parentes até ao 6.º grau dos reis de Portugal.

Art. 75.º O Presidente eleito assume as suas funções no dia em que expira o mandato do anterior e toma posse perante a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa, reunidas em sessão conjunta, usando a seguinte fórmula de compromisso:

«Juro manter e cumprir leal e fielmente a Constituição da República, observar as leis, promover o bem geral da Nação, sustentar e defender a integridade e a independência da Pátria Portuguesa».

Art. 76.º O Presidente da República só pode ausentar-se do País com assentimento da Assembleia Nacional e do Governo. Este assentimento é desnecessário nos casos de

simples passagem ou de viagens sem carácter official de duração não superior a cinco dias.

§ único. A inobservância do disposto neste artigo envolve, de pleno direito, a perda do cargo.

Art. 77.º O Presidente da República percebe um subsídio, que será fixado antes da sua eleição, e pode escolher duas propriedades do Estado que deseje utilizar para a Secretaria da Presidência e para a sua residência e das pessoas de sua familia.

Art. 78.º O Presidente da República responde directa e exclusivamente perante a Nação pelos actos practicados no exercício das suas funções, sendo o exercício destas e a sua magistratura independentes de quaisquer votações da Assembleia Nacional.

§ único. Por crimes estranhos ao exercício das suas funções o Presidente responderá perante os tribunais comuns, mas só depois de findo o mandato.

Art. 79.º O Presidente da República pode renunciar ao cargo em mensagem dirigida à Nação e publicada no «Diario do Governo».

Art. 80.º No caso de vagatura da Presidência da República, por morte, renúncia, impossibilidade física permanente do Presidente ou ausência para país estrangeiro sem assentimento da Assembleia Nacional e do Governo, o novo Presidente será eleito no 30.º dia posterior à vagatura.

§ 1.º A impossibilidade física permanente do Presidente da República deve ser reconhecida pelo Conselho de Estado, para esse efeito convocado pelo Presidente do Conselho de Ministros, que, em caso afirmativo, fará publicar no «Diário do Governo» a declaração de vagatura da Presidência.

§ 2.º Enquanto se não realizar a eleição prevista neste artigo, ou quando por qualquer motivo houver impedimento transitório das funções presidenciais, ficará o Presidente do Conselho, e, na sua falta, o Presidente da Assembleia Nacional, investido nas atribuições de Chefe do Estado, com prejuízo, no último caso, do exercício das funções próprias.

Art. 80.º-A. Nos casos de impossibilidade da reunião do colégio eleitoral, verificada pelo Conselho de Estado, a eleição do novo Presidente da República far-se-á no 15.º dia posterior àquele em que o mesmo Conselho considerar terminada a situação de força maior.

CAPÍTULO II

Das atribuições do Presidente da República

Art. 81.º Compete ao Presidente da República:

1.º Nomear o Presidente do Conselho e os Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado de entre os cidadãos portugueses e exonerá-los;

2.º Abrir solenemente a primeira sessão legislativa de cada legislatura e dirigir mensagens à Assembleia Nacional, endereçando-as ao Presidente, que deverá lê-las na primeira sessão posterior ao seu recebimento;

3.º Marcar, em harmonia com a lei eleitoral, o dia para as eleições gerais ou suplementares de Deputados;

4.º Dar à Assembleia Nacional poderes constituintes e submeter a plebiscito nacional as alterações da Constituição que se refiram à função legislativa ou seus órgãos, nos termos do artigo 177.º, n.ºs 1.º e 2.º;

5.º Convocar extraordinariamente, por urgente necessidade pública, a Assembleia Nacional para deliberar sobre assuntos determinados, e adiar as suas sessões, sem prejuízo da duração fixada para a sessão legislativa em cada ano;

6.º Dissolver a Assembleia Nacional quando assim o exigirem os interesses superiores da Nação;

7.º Representar a Nação e dirigir a política externa do Estado, concluir acordos e ajustar tratados internacionais, directamente ou por intermédio de representantes, e ratificar os tratados, depois de aprovados pela Assembleia Nacional ou pelo Governo;

8.º Indultar e comutar penas. O indulto não pode ser concedido antes de cumprida metade da pena;

9.º Promulgar e fazer publicar as leis e resoluções de Assembleia Nacional, bem como os decretos-leis, os decretos para o Ultramar e os decretos regulamentares, e assinar os restantes decretos. Os diplomas mencionados neste número que não sejam promulgados, assinados e publicados, segundo nele se determina, são juridicamente inexistentes.

Art. 82.º Os actos do Presidente da República devem ser referendados pelo Presidente do Conselho e pelo Ministro ou Ministros competentes, sem o que serão juridicamente inexistentes.

§ 1.º Não carecem de referenda:

1.º A nomeação e exoneração do Presidente do Conselho;

2.º As mensagens dirigidas à Assembleia Nacional;

3.º A mensagem de renúncia ao cargo.

§ 2.º Devem ser referendados por todos os Ministros os decretos-leis e os decretos que aprovelem tratados internacionais que versem matéria legislativa, quando uns e outros não tiverem sido aprovados em Conselho de Ministros.

§ 3.º A promulgação das leis e resoluções da Assembleia Nacional será referendada apenas pelo Presidente do Conselho.

CAPÍTULO III

Do Conselho de Estado

Art. 83.º Junto do Presidente da República funciona o Conselho de Estado, composto dos seguintes membros:

1.º O Presidente do Conselho de Ministros;

2.º O da Assembleia Nacional;

3.º O da Câmara Corporativa;

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

- 4.º O do Supremo Tribunal de Justiça;
- 5.º O Procurador-Geral da República;
- 6.º Dez homens públicos de superior competência, nomeados vitaliciamente pelo Chefe do Estado;

Art. 84.º São obrigatoriamente atribuições do Conselho de Estado:

a) Verificar a situação de impossibilidade da reunião do colégio eleitoral referida no artigo 72.º e a cessação dela para os efeitos do artigo 80.º-A, bem como a impossibilidade de realização das eleições para Deputados prevista no artigo 85.º;

b) Assistir ao Chefe do Estado quando tenha de exercer alguma das atribuições consignadas nos n.ºs 4.º, 5.º e 6.º do artigo 81.º e § único do artigo 87.º

c) Pronunciar-se, no caso do § 1.º do artigo 80.º, em todas as emergências graves para a vida da Nação e sempre que o Presidente da República o julgue necessário e para tal o convoque.

§ único. O Conselho reunir-se-á por direito próprio para exercer a competência a que se refere a primeira parte da alínea a).

TÍTULO III

Da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa

CAPÍTULO I

Da Constituição da Assembleia Nacional

Art. 85.º A Assembleia Nacional é composta de cento e cinquenta Deputados, eleitos por sufrágio directo dos cidadãos eleitores, e o seu mandato terá a duração de quatro anos improrrogáveis, salvo o caso de acontecimentos que tornem impossível a realização do acto eleitoral.

§ 1.º Em lei especial serão determinados os requisitos de elegibilidade dos Deputados, a organização dos colégios eleitorais e o processo de eleição.

§ 2.º Ninguém pode ser ao mesmo tempo membro da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa.

§ 3.º As vagas que ocorrerem na Assembleia Nacional, quando atingirem o número que a lei eleitoral fixar, até a quinta parte do número legal de Deputados, são preenchidas por eleição suplementar, expirando os respectivos mandatos no fim da legislatura.

§ 4.º Os Deputados podem renunciar ao mandato, mas a eficácia da renúncia depende da aceitação da Assembleia ou do seu Presidente, conforme for apresentada durante ou no intervalo das sessões. Os efeitos da renúncia, quando aceita, só se produzem a partir da aceitação.

Art. 86.º Compete à Assembleia Nacional verificar e reconhecer os poderes dos seus membros, eleger a sua Mesa, elaborar o seu regimento interno e regular a sua polícia.

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

Art. 87.º Se a Assembleia Nacional for dissolvida, as eleições devem efectuar-se dentro de sessenta dias, pela lei eleitoral vigente ao tempo da dissolução. As novas Câmaras reunirão dentro dos trinta dias seguintes ao encerramento das operações eleitorais, se não estiver concluída a sessão legislativa desse ano, e duram uma legislatura completa, sem contar o tempo que funcionarem em complemento da sessão legislativa anterior e sem prejuízo do direito de dissolução.

§ único. O prazo de sessenta dias fixado neste artigo pode ser prorrogado até seis meses, se assim o aconselharem os superiores interesses do País.

Art. 88.º Depois da última sessão legislativa ordinária do quadriénio, a Assembleia Nacional subsistirá até o apuramento do resultado das novas eleições gerais.

CAPÍTULO II

Dos membros da Assembleia Nacional

Art. 89.º Os membros da Assembleia Nacional gozam das seguintes imunidades e regalias:

a) São invioláveis pelas opiniões e votos que emitirem no exercício do seu mandato, com as restrições constantes dos §§ 1.º e 2.º;

b) Não podem ser jurados, peritos ou testemunhas sem autorização da Assembleia;

c) Não podem ser detidos nem estar presos sem assentimento da Assembleia, excepto por crime a que corresponda pena maior ou equivalente na escala penal, e, neste caso, quando em flagrante delito ou em virtude de mandato judicial;

d) Movido procedimento criminal contra algum Deputado e indiciado este por despacho de pronúncia ou equivalente, o juiz comunicará o facto à Assembleia, que, fora o caso previsto na última parte da alínea c) deste artigo, decidirá se o Deputado deve ou não ser suspenso, para efeito do seguimento do processo;

e) **Têm direito às precedências oficiais correspondentes à sua dignidade de representantes da Nação e ao subsídio que a lei eleitoral estabelecer.**

§ 1.º A inviolabilidade pelas opiniões e votos não isenta os membros da Assembleia Nacional da responsabilidade civil e criminal por difamação, calúnia e injúria, ultraje à moral pública ou provocação pública ao crime.

§ 2.º A Assembleia Nacional pode retirar o mandato aos Deputados que emitam opiniões contrárias à existência de Portugal como Estado independente ou por qualquer forma incitem à subversão violenta da ordem política e social.

§ 3.º **As imunidades e regalias estabelecidas nas alíneas b) e d) e segunda parte da alínea e) subsistem apenas durante o exercício efectivo das funções legislativas.**

Art. 90.º Importa perda de mandato para os membros da Assembleia Nacional:

1.º Aceitar do Governo, ou de qualquer Governo estrangeiro, emprego retribuído ou comissão subsidiada;

2.º Exercer os seus respectivos cargos durante o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, se forem funcionários públicos, civis ou militares;

3.º Servir lugares de administração, gerência e fiscalização, que não sejam exercidos por nomeação do Governo, ou de consulta jurídica ou técnica em empresas ou sociedades constituídas por contratos ou concessões especiais do Estado, ou que deste hajam privilégio não conferido por lei geral, ou subsídio ou garantia de rendimento ou juro;

4.º Celebrar contratos com o Governo;

5.º Ser concessionário, contratador ou sócio de contratadores de concessões, arrematações ou empreitadas públicas, ou participante em operações financeiras do Estado.

§ 1.º Exceptuam-se do disposto no n.º 1.º:

a) As missões diplomáticas temporárias e as comissões ou comandos militares que não importem residência fora do Continente;

b) As nomeações por acesso, as promoções legais, a conversão em definitivos dos provimentos que o não sejam e as nomeações para cargos equivalentes resultantes de remodelação de serviços;

c) As nomeações que por lei são feitas pelo Governo precedendo concurso, ou sob proposta de entidades a quem legalmente caiba fazer indicação ou escolha do funcionário, bem como as nomeações para cargos e comissões que só por determinada classe e categoria de funcionários devam ser desempenhados.

§ 2.º A verificação pelo Presidente dos factos referidos nos n.ºs 1.º e 2.º tem os mesmos efeitos que a aceitação da renúncia.

§ 3.º Os casos referidos nos n.ºs 4.º e 5.º importam ainda nulidade dos contratos ou actos aí previstos.

CAPÍTULO III

Das atribuições da Assembleia Nacional

Art. 91.º Compete à Assembleia Nacional:

1.º Fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las;

2.º Vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os actos do Governo ou da Administração, podendo declarar com força obrigatória geral, mas ressalvadas sempre as situações criadas pelos casos julgados, a inconstitucionalidade de quaisquer normas;

3.º Tomar as contas respeitantes a cada ano económico, tanto da metrópole como das províncias ultramarinas, as quais lhe serão apresentadas com o relatório e decisão do Tribunal de Contas, se este as tiver julgado, e os demais elementos que forem necessários para a sua apreciação;

4.º Autorizar o Governo, até 15 de Dezembro de cada ano, a cobrar as receitas do Estado e a pagar as despesas públicas na gerência futura, definindo na respectiva lei de autorização os princípios a que deve ser subordinado o orçamento, na parte das despesas cujo quantitativo não é determinado em harmonia com as leis preexistentes;

5.º Autorizar o Governo a realizar empréstimos e outras operações de crédito que não sejam de dívida flutuante, estabelecendo as condições gerais em que podem ser feitas;

6.º Autorizar o Chefe do Estado a fazer a guerra, se não couber o recurso à arbitragem, ou esta se malograr, salvo caso de agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras, e a fazer a paz;

7.º Aprovar os tratados de paz, aliança ou arbitragem, os que se refiram à associação de Portugal com outros Estados e os que versem matérias da sua competência exclusiva e ainda os tratados internacionais submetidos à sua apreciação;

8.º Declarar o estado de sitio, com suspensão total ou parcial das garantias constitucionais, em um ou mais pontos do território nacional, no caso de agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras ou no de a segurança e a ordem públicas serem gravemente perturbadas ou ameaçadas;

9.º Definir os limites dos territórios da Nação;

10.º Conceder amnistias;

11.º Tomar conhecimento das mensagens do Chefe do Estado;

12.º Deliberar sobre a revisão constitucional;

13.º Conferir ao Governo autorizações legislativas.

Art. 92. As leis votadas pela Assembleia Nacional devem restringir-se à aprovação das bases gerais dos regimes jurídicos, não podendo, porém, ser contestada, com fundamento na violação deste princípio, a legitimidade constitucional de quaisquer preceitos nelas contidos.

Art. 93.º Constitui matéria da exclusiva competência da Assembleia Nacional a aprovação das bases gerais sobre:

a) Aquisição e perda da nacionalidade portuguesa;

b) Organização dos tribunais, estatuto dos juizes dos tribunais ordinários e termos em que pode ser feita a respectiva requisição para comissões permanentes ou temporárias;

c) Organização da defesa nacional e definição dos deveres de la decorrentes;

d) Exercício das liberdades a que se refere o § 2.º do artigo 8.º

e) Definição das penas criminaes e das medidas de segurança;

f) Condições do uso da providência do «habeas corpus»;

g) Expropriação por utilidade pública e requisição;

h) Impostos, nos termos do artigo 70.º, ressalvada, porém, a competência dos órgãos legislativos para o ultramar;

i) Sistema monetário;

j) Padrão dos pesos e medidas;

l) Criação de institutos de emissão;

m) Regime geral do governo das províncias ultramarinas;

n) Definição da competência do Governo e dos governos ultramarinos quanto à área e ao tempo das concessões de terrenos ou outras que envolvam exclusivo ou privilégio especial;

o) Autorização às províncias ultramarinas para celebrar contratos que não sejam de empréstimo, quando exijam caução ou garantias especiais.

§ 1.º Em caso de urgência e necessidade pública poderá o Governo, independentemente de autorização legislativa e fora do funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, legislar em matéria de impostos e sistema monetário devendo, porém, o decreto-lei em que o fizer ser ratificado na sessão legislativa que se seguir à publicação, sob pena de caducidade.

§ 2.º A iniciativa das leis que respeitem especialmente ao ultramar cabe em exclusivo ao Governo.

CAPÍTULO IV

Do funcionamento da Assembleia Nacional e da promulgação das leis e resoluções

Art. 94.º A sessão legislativa da Assembleia Nacional compreende dois períodos, o primeiro dos quais de 15 de Novembro a 15 de Dezembro e o segundo de 15 de Janeiro a 30 de Abril, salvo o disposto nos artigos 75.º, 76.º e 81.º, n.º 5.º

Art. 95.º A Assembleia Nacional funciona em sessões plenárias e as suas deliberações são tomadas à pluralidade absoluta de votos, achando-se presente a maioria do número legal dos seus membros; e pode organizar-se em comissões permanentes ou constituir comissões eventuais para fins determinados.

§ 1.º As sessões plenárias são públicas, salvo resolução em contrário da Assembleia ou do seu Presidente.

§ 2.º As comissões só estarão em exercício entre o início e o termo da sessão legislativa, salvo quando esse exercício deva prolongar-se pela natureza das suas funções ou pelo fim especial para que se constituíram, ou ainda quando o Presidente as convoque, nas duas semanas anteriores à abertura, da sessão legislativa, para se ocuparem de propostas ou projectos de lei já apresentados que devam ser objecto dos trabalhos da Assembleia.

Podem reunir no intervalo das sessões as comissões eventuais que o Presidente constitua fora do período de funcionamento efectivo da Assembleia.

§ 3.º Os membros do Governo podem tomar parte nas reuniões das comissões, e, sempre que sejam apreciados projectos ou propostas de alterações sugeridas pela Câmara Corporativa, poderá participar nelas, como delegado, um Procurador desta Câmara.

Art. 96.º Os Deputados podem:

1.º Formular, por escrito, perguntas, para esclarecimento da opinião pública, sobre quaisquer actos do Governo ou da Administração;

2.º Independentemente do funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, ouvir, consultar ou solicitar informações de qualquer corporação ou estação oficial acerca de assuntos de administração pública; as estações oficiais, porém, não podem responder sem prévia autorização do respectivo Ministro.

§ único. Em ambos os casos, só é lícito recusar a resposta com fundamento em segredo de Estado.

Art. 97.º A iniciativa da lei compete indistintamente ao Governo ou a qualquer dos membros da Assembleia Nacional; não poderão, porém, estes apresentar projectos de lei ou propostas de alteração que envolvam aumento de despesa ou diminuição de receita do Estado criada por leis anteriores.

§ 1.º O Governo pode, durante a discussão das propostas ou projectos, submeter à apreciação da Assembleia quaisquer alterações, desde que incidam sobre matéria ainda não votada.

§ 2.º Pode a Assembleia Nacional, sem prejuízo do disposto no § único do artigo 101.º, por sua própria iniciativa ou por solicitação do Governo, declarar a urgência de qualquer proposta ou projecto de lei, que ficará, neste caso, submetido a tramitação especial.

Art. 98. As propostas e projectos aprovados pela Assembleia Nacional denominam-se decretos da Assembleia Nacional e são enviados ao Presidente da República, para serem promulgados como lei dentro dos quinze días immediatos.

§ único. Os decretos não promulgados dentro deste prazo serão de novo submetidos à apreciação da Assembleia Nacional e, se então forem aprovados por maioria de dois terços do número dos seus membros em efectividade de funções, o Chefe do Estado não poderá recusar a promulgação.

Art. 99.º A promulgação é feita com esta fórmula:

Em nome da Nação, a Assembleia Nacional decreta e eu promulgo a lei (ou resolução) seguinte:

§ único. São promulgadas como resoluções:

- a) As ratificações dos decretos-leis;
- b) As deliberações a que se referem os n.ºs 3.º, 6.º, 7.º, e 12.º do artigo 91.º e outras semelhantes.

Art. 100.º As propostas ou projectos apresentados à Assembleia Nacional e não discutidos na respectiva sessão não carecem de ser renovados nas seguintes, da mesma legislatura; e, quando definitivamente rejeitados, não podem ser renovados na mesma sessão legislativa, salvo o caso de dissolução da Assembleia Nacional.

Art. 101.º No Regimento da Assembleia constarão:

- a) A proibição de preterir a ordem do dia por assunto não anunciado com antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas;
- b) As condições de apresentação de projectos de lei;
- c) A regulamentação do exercício dos demais poderes, direitos, imunidades e regalias dos Deputados.
- d) Os termos da tramitação especial a que alude o § 2.º do artigo 97.º

§ único. A ordem do dia das reuniões da Assembleia Nacional será fixada pelo seu Presidente e deverá atender as prioridades solicitadas pelo Presidente do Conselho de Ministros para propostas do Governo e projectos ou outras iniciativas de Deputados,

CAPÍTULO V

Da Câmara Corporativa

Art. 102.º Haverá uma Câmara Corporativa, com duração igual à da Assembleia Nacional, composta de representantes das autarquias locais e dos interesses sociais, considerados estes nos eus ramo fundamentais de ordem administrativa, moral, cultural e económica, designando a lei aqueles a quem incumbe tal representação ou o modo como serão escolhidos e a duração do seu mandato.

§ 1.º Quando vagarem cargos cujos serventuários tenham, nessa qualidades, assento na Câmara Corporativa, a representação respectiva compete aos que legal ou estatutariamente os devam substituir. A mesma doutrina se aplica aos casos de impedimento.

§ 2.º Fora da hipótese prevista no parágrafo anterior, as vagas ocorridas na Câmara Corporativa são preenchidas pela forma por que forem designados os substituídos.

§ 3.º Aos membros desta Câmara é aplicável o disposto no artigo 89.º e seus parágrafos, substituídas, porém, as deliberações a que se referem as alíneas b), c) e d) do mesmo artigo pela autorização ou decisão do Presidente e determinando-se por lei o quantitativo e as condições em que será percebido o subsídio referido na alínea e).

Art. 103.º Compete á Câmara Corporativa relatar e dar parecer sobre todas as propostas ou projectos de lei e sobre todas as convenções ou tratados internacionais que forem presentes à Assembleia Nacional, antes de começar nesta a discussão.

§ 1.º O parecer será dado dentro de trinta dias, ou no prazo que o Governo ou a Assembleia fixar, se a matéria for considerada urgente.

§ 2.º Decorridos os prazos a que se refere o parágrafo anterior sem que o parecer tenha sido enviado à Assembleia Nacional, poderá iniciar-se imediatamente a discussão.

§ 3.º Se a Câmara Corporativa, pronunciando-se pela rejeição na generalidade de um projecto de lei, sugerir a sua substituição por outro, poderá o Governo ou qualquer Deputado adoptá-lo e será discutido em conjunto com o primitivo, independentemente de nova consulta à Câmara Corporativa. Se esta sugerir alterações à proposta ou projecto na especialidade, poderá a Assembleia Nacional decidir que a votação incida, de preferência, sobre o texto sugerido pela Câmara Corporativa e poderá sempre qualquer Deputado fazer suas tais alterações.

Art. 104.º A Câmara Corporativa funciona em sessões plenárias ou por secções e subsecções.

§ 1.º Além de uma secção permanente, existirão secções correspondentes, aos vários interesses de ordem administrativa, moral, cultural e económica representados na Câmara e poderão existir subsecções correspondentes aos interesses especializados dentro de cada secção.

§ 2.º Quando a matéria em estudo assim o reclamar, poderão reunir duas ou mais secções ou subsecções.

§ 3.º Não podem ser emitidos através da secção permanente os pareceres da Câmara Corporativa que resultem de consulta obrigatória.

§ 4.º Na discussão das propostas ou projectos podem intervir o Presidente do Conselho e os Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado competentes, os representantes de uns e outros e o Deputado que do projecto houver tido a iniciativa.

§ 5.º As sessões da secções e subsecções da Câmara Corporativa não são públicas, mas poderão sê-lo as plenárias.

Art. 105.º O Governo poderá consultar a Câmara Corporativa sobre diplomas a publicar ou propostas de lei a apresentar à Assembleia Nacional, determinar que o trabalho das secções ou subsecções prossiga ou se realize durante os adiamentos, interrupções e intervalos das sessões legislativas e pedir a convocação de todas ou algumas das secções ou subsecções para lhes fazer qualquer comunicação.

§ 1.º A discussão das propostas de lei na Assembleia Nacional não dependerá de nova consulta à Câmara Corporativa se já tiver sido ouvida pelo Governo.

§ 2.º Durante a sessão legislativa da Assembleia Nacional, poderá a Câmara Corporativa sugerir ao Governo as providências que julgue convenientes ou necessárias.

Art. 106.º A Câmara Corporativa é aplicável o preceituado no artigo 86.º, salvo no que se refere à verificação de poderes, que ficará a cargo de uma comissão especial por ela eleita.

§ 1.º No Regimento da Câmara Corporativa constarão a proibição de preterir a ordem do dia por assunto não anunciado com antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, e as condições de apresentação das sugestões de providências a que alude o artigo 105.º;

§ 2.º As secções e subsecções da Câmara Corporativa é reconhecida a faculdade conferida no artigo 96.º, n.º 2.º, aos membros da Assembleia Nacional.

TÍTULO IV

Do Governo

Art. 107.º O Governo é constituído pelo Presidente do Conselho, que poderá gerir os negócios de um ou mais Ministérios, e pelos Ministros, os quais serão substituídos por aquele nos actos da sua competência, sempre que se achem ausentes do continente ou impedidos e não hajam sido nomeados Ministros interinos.

§ 1.º O Presidente do Conselho é nomeado e exonerado livremente pelo Presidente da República. Os Ministros, os Secretários e os Subsecretários de Estado são nomeados pelo Presidente da República, sob proposta do Presidente do Conselho, e as suas nomeações por este referendadas, bem como as exonerações dos Ministros cessantes.

§ 2.º As funções dos Secretários e Subsecretários de Estado cessam com a exoneração do respectivo Ministro.

Art. 108.º O Presidente do Conselho responde perante o Presidente da República pela política geral do Governo e coordena e dirige a actividade de todos os Ministros, que perante ele respondem politicamente pelos seus actos.

Art. 109.º Compete ao Governo:

- 1.º Referendar os actos do Presidente da República;
- 2.º Fazer decretos-leis e aprovar os tratados ou acordos internacionais que versem matéria legislativa ou da sua competência.
- 3.º Elaborar os decretos, regulamentos e instruções para a boa execução das leis;
- 4.º Superintender no conjunto da administração pública, fazendo executar as leis e resoluções da Assembleia Nacional, fiscalizando superiormente os actos dos corpos administrativos e das pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e praticando todos os actos respeitantes à nomeação, transferência, exoneração, reforma, aposentação, demissão ou reintegração do funcionalismo civil ou militar, com ressalva para os interessados do recurso aos tribunais competentes.

§ 1.º Os actos do Presidente da República e do Governo que envolvam aumento ou diminuição de receitas ou despesas são sempre referendados pelo Ministro das Finanças.

§ 2.º As autorizações legislativas, exceptuadas as que, por força dos seus próprios termos, importarem uso continuado, não podem ser aproveitadas mais de uma vez. Pode, no entanto, o Governo utilizá-las parcelarmente até as esgotar.

§ 3.º Se o Governo, durante o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, publicar decretos-leis fora dos casos de autorização legislativa, serão aqueles sujeitos a ratificação, que se considerará concedida quando, nas primeiras dez sessões posteriores à publicação, dez Deputados, pelo menos, não requeiram que tais decretos-leis sejam submetidos à apreciação da Assembleia.

No caso de ser recusada a ratificação, o decreto-lei deixará de vigorar desde o dia em que sair no «Diário do Governo» o respectivo aviso, expedido pelo Presidente da Assembleia.

A ratificação pode ser concedida com emendas; neste caso, o decreto-lei será enviado à Câmara Corporativa, se esta não tiver sido já consultada, mas continuará em vigor, salvo se a Assembleia Nacional, por maioria de dois terços dos Deputados em efectividade de funções, suspender a sua execução.

§ 4.º Em caso de urgência e necessidade pública, e fora do funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, poderá o Governo substituir-se a esta na aprovação de tratados internacionais que versarem matéria da competência exclusiva da Assembleia, devendo, porém, o decreto do Governo ser ratificado na primeira sessão legislativa que se seguir à sua publicação.

§ 5.º Nos casos previstos no n.º 8.º do artigo 91.º, se a Assembleia Nacional não se encontrar em funcionamento e não for possível convocá-la a tempo, ou se estiver impedida de reunir, poderá o Governo, a título provisório, declarar o estado de sítio, com os efeitos referidos naquela disposição. O estado de sítio declarado pelo Governo não poderá durar mais de noventa dias sem que o decreto-lei tenha sido expressamente ratificado pela Assembleia Nacional, salvo se a reunião desta continuar a ser absolutamente impossível. Terminado o estado de sítio, o Governo enviará à Assembleia um relato das medidas tomadas durante a sua vigência.

§ 6.º Ocorrendo actos subversivos e graves em qualquer parte do territorio nacional, poderá o Governo, quando não se justifique a declaração de estado de sítio, adop-

tar as providências necessárias para reprimir a subversão e prevenir a sua extensão, com a restrição de liberdades e garantias individuais que se mostrar indispensável; deve, todavia, a Assembleia Nacional, quando a situação se prolongue, pronunciar-se sobre a existência e gravidade dela.

§ 7.º Quando a lei não for exequível por si mesma, o Governo expedirá os respectivos decretos dentro do prazo de seis meses a contar da sua publicação, se nela não for determinado outro prazo.

§ 8.º A nomeação dos governadores das províncias ultramarinas é feita em Conselho de Ministros.

§ 9.º Revestirão a forma de decreto a nomeação, transferência, exoneração, reforma, aposentação, demissão ou reintegração do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do procurador-geral da República, dos agentes dip'omáticos e consulares e dos governadores das províncias ultramarinas, de governo-geral ou simples.

Art. 110.º Os Ministros não podem acumular o exercício de outra função pública ou de qualquer emprego particular.

§ 1.º Aplicam-se aos Ministros as demais proibições e preceitos do artigo 90.º

§ 2.º Os membros da Assembleia Nacional ou da Câmara Corporativa que aceitarem o cargo de Ministro, Secretário ou Subsecretário de Estado não perdem o mandato, mas não poderão tomar assento na respectiva Câmara.

Art. 111.º O Conselho de Ministros reúne-se quando o seu Presidente ou o Chefe do Estado o julgarem indispensável. Quando o mesmo Presidente ou o Chefe do Estado assim o entenderem, a reunião será sob a presidência deste, e sê-lo-à obrigatoriamente quando o Chefe do Estado tenha de usar das atribuições que lhe são conferidas pelos n.ºs 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 8.º do artigo 81.º

Art. 112.º O Governo é da exclusiva confiança do Presidente da República e a sua conservação no Poder não depende do destino que tiverem as suas propostas de lei ou de quaisquer votações da Assembleia Nacional.

Art. 113.º O Presidente do Conselho enviará ao Presidente da Assembleia Nacional as propostas de lei que à mesma hajam de ser submetidas, bem como as explicações pedidas ao Governo ou que este julgue convenientes.

§ único. Tratando-se de assuntos de reconhecido interesse nacional, poderá o Presidente do Conselho ou um Ministro por ele autorizado comparecer na Assembleia Nacional para deles se ocupar.

Art. 114.º Cada Ministro é responsável política, civil e criminalmente pelos actos que legalizar ou praticar. Os Ministros são julgados nos tribunais ordinários pelos actos que importem responsabilidade civil ou criminal.

§ único. Se algum Ministro for processado criminalmente, chegado o processo até à pronúncia, inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça, em sessão plena e com a assistência do procurador-geral da República, decidirá se o Ministro deve ser imediatamente julgado, ficando em tal caso suspenso, ou se o julgamento deve realizar-se depois de terminadas as suas funções.

Art. 115.º São crimes de responsabilidade os actos dos Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado e dos agentes do Governo que atentarem:

- 1.º Contra a existência política da Nação;
- 2.º Contra a Constituição e o regime político estabelecido;
- 3.º Contra o livre exercício dos órgãos da soberania;
- 4.º Contra o gozo e o exercício dos direitos políticos e individuais;
- 5.º Contra a segurança interna do País;
- 6.º Contra a probidade da Administração;
- 7.º Contra a guarda e emprego constitucional dos dinheiros públicos;
- 8.º Contra as leis da contabilidade pública.

§ único. A condenação por qualquer destes crimes envolve a perda do cargo e a incapacidade para exercer funções públicas.

TÍTULO V

Dos tribunais

Art. 116.º A função judicial é exercida por tribunais ordinários e especiais.

São tribunais ordinários o Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais judiciais da 2.ª e 1.ª instância, que terão a competência territorial e material fixada por lei.

Art. 117.º Não é permitida a criação de tribunais especiais com competência exclusiva para julgamento de determinada ou determinadas categorias de crimes, excepto sendo estes fiscais, sociais ou contra a segurança do Estado.

Art. 118.º O Estado será representado junto dos tribunais pelo Ministério Público.

Art. 119.º Os juizes dos tribunais ordinários são vitalícios e inamovíveis, fixando a lei os termos em que se faz a sua nomeação, promoção, demissão, suspensão, transferência e colocação fora do quadro, e não podem aceitar do Governo outras funções remuneradas, sem prejuízo da sua requisição para comissões permanentes ou temporárias.

Art. 120.º Os juizes são irresponsáveis nos seus julgamentos, ressalvadas as excepção que a lei consignar.

Art. 121.º As audiências dos tribunais são públicas, excepto nos casos especiais indicados na lei e sempre que a publicidade for contrária ao interesse e ordem públicos ou aos bons costumes.

Art. 122.º Na execução dos seus despachos e sentenças os tribunais têm direito à coadjuvação das outras autoridades, quando dela carecerem.

Art. 123.º Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto nesta Constituição ou ofendam os principios nela consignados, cabendo-lhes, para o efeito, apreciar a existência da inconstitucionalidade, salvo se o seu conhecimento for da competência exclusiva da Assembleia Nacional, nos termos do § 2.º deste artigo.

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

§ 1.º A lei poderá concentrar em algum ou alguns tribunais a competência para a apreciação da inconstitucionalidade referida no corpo do artigo e conferir às decisões desses tribunais força obrigatória geral.

§ 2.º A inconstitucionalidade orgánica ou formal da regra de direito constante de diplomas promulgados pelo Presidente da República ou de normas constantes de tratados ou outros actos internacionais só poderá ser apreciada pela Assembleia Nacional e por sua iniciativa ou do Governo, determinando a mesma Assembleia os efeitos da inconstitucionalidade, sem ofensa, porém, das situações criadas pelos casos julgados.

Art. 124.º Para prevenção e repressão dos crimes haverá penas e medidas de segurança que terão por fim a defesa da sociedade e tanto quanto possível a readaptação social do delincente.

TÍTULO VI

Da divisão administrativa e das autarquias locais na metrópole

Art. 125.º Sem prejuízo da designação regional «provincia», o território do continente divide-se em concelhos, que se formam de freguesias e se agrupam em distritos, estabelecendo a lei os limites de todas as circunscrições.

§ 1.º Os concelhos de Lisboa e Porto subdividem-se em bairros e estes em freguesias.

§ 2.º A divisão do território das ilhas adjacentes e a respectiva organização administrativa serão reguladas em lei especial.

Art. 126.º Os corpos administrativos são as câmaras municipais, as juntas de freguesia e as juntas distritais.

Art. 127.º A vida administrativa das autarquias locais está sujeita à inspecção de agentes do Governo, podendo as deliberações dos respectivos corpos administrativos depender da autorização ou exigir a aprovação de outros organismos ou autoridades e ser submetidas a referendium.

Art. 128.º Para execução das suas deliberações e demais fins especificados nas leis, os corpos administrativos têm o presidente ou comissões delegadas nos termos das mesmas leis.

Art. 129.º As deliberações dos corpos administrativos só podem ser modificadas ou anuladas nos casos e pela forma previstos nas leis administrativas.

Art. 130.º Os corpos administrativos têm autonomia financeira, nos termos que a lei determinar, sendo, porém, as câmaras municipais obrigadas a distribuir pelas freguesias, com destino a melhoramentos rurais, a parte das receitas fixada na lei.

Art. 131.º Os regimes tributários das autarquias locais serão estabelecidos por forma que não seja prejudicada a organização fiscal ou a vida financeira do Estado, nem dificultada a circulação dos produtos e mercadorias entre as circunscrições do País.

Art. 132.º Os corpos administrativos só podem ser dissolvidos nos casos e nos termos estabelecidos nas leis administrativas.

TÍTULO VII

Das províncias Ultramarinas

Art. 133.º Os territórios da Nação Portuguesa situados fora da Europa constituem províncias ultramarinas, as quais terão estatutos próprios, como regiões autónomas, podendo ser designadas por Estados, de acordo com a tradição nacional, quando o progresso do seu meio social e a complexidade da sua administração justifiquem essa qualificação honorífica.

§ único. A lei que fixar o regime geral de governo das províncias ultramarinas e estabelecer, em conformidade, o respectivo estatuto deverá prever a possibilidade de serem criados serviços públicos nacionais, integrados na organização de todo o território português.

Art. 134.º Cada província constitui uma pessoa colectiva de direito público, com capacidade para adquirir, contratar e estar em juízo e cujo estatuto estabelecerá a organização político-administrativa adequada à sua situação geográfica e às condições do seu desenvolvimento.

Art. 135.º A autonomia das províncias ultramarinas compreende:

- a) O direito de possuir órgãos electivos de governo próprio;
- b) O direito de legislar, através de órgãos próprios, com respeito das normas constitucionais e das emanadas dos órgãos de soberania, sobre todas as matérias que interessem exclusivamente à respectiva província e não estejam reservadas pela Constituição ou pela lei a que se refere a alínea m) do artigo 93.º à competência daqueles últimos órgãos;
- c) O direito de assegurar, através dos órgãos de governo próprio, a execução das leis e a administração interna;
- d) O direito de dispor das suas receitas e de as afectar às despesas públicas, de acordo com a autorização votada pelos órgãos próprios de representação e os princípios consignados nos artigos 63.º e 66.º;
- e) O direito de possuir e dispor do seu património e de celebrar os actos e contratos em que tenham interesse;
- f) O direito de possuir regime económico adequado às necessidades do seu desenvolvimento e do bem-estar da sua população;
- g) O direito de recusar a entrada no seu território a nacionais ou estrangeiros por motivos de interesse público, e de ordenar a respectiva expulsão, de acordo com as leis, quando da sua presença resultarem graves inconvenientes de ordem interna ou internacional, salvo o recurso para o Governo.

Art. 136.º O exercício da autonomia das províncias ultramarinas não afectará a unidade da Nação, a solidariedade entre todas as parcelas do território português, nem a integridade da soberania do Estado.

Para esse efeito, compete aos órgãos da soberania da República:

- a) Representar, interna e internacionalmente, toda a Nação, não podendo as províncias manter relações diplomáticas ou consulares com países estrangeiros, nem cele-

brar, separadamente, acordos ou convenções com esses países ou neles contrair empréstimos;

b) Estabelecer os estatutos das províncias ultramarinas, legislar sobre as matérias de interesse colectivo ou de interesse superior do Estado, conforme for especificado na lei a que se refere a alínea m) do artigo 93.º, revogar ou anular os diplomas locais que contrariem tais interesses ou ofendam as normas constitucionais e as provenientes dos órgãos de soberania;

c) Designar o governador de cada província, como representante do Governo e chefe dos órgãos executivos locais;

d) Assegurar a defesa nacional;

e) Superintender na administração das províncias, de harmonia com os interesses superiores do Estado;

f) Fiscalizar a sua gestão financeira, prestando-lhes a assistência indispensável, mediante as garantias adequadas, e proporcionando-lhes as operações de crédito que forem convenientes;

g) Assegurar a integração da economia de cada província na economia geral da Nação;

h) Proteger, quando necessário, as populações contra as ameaças à sua segurança e bem-estar que não possam ser remediadas pelos meios locais;

i) Zelar pelo respeito dos direitos individuais, nos termos da Constituição, dos valores culturais das populações e dos seus usos e costumes não incompatíveis com a moral e o direito público português.

§ 1.º Os órgãos de soberania com atribuições legislativas relativamente às províncias ultramarinas são a Assembleia Nacional, nas matérias da sua exclusiva competência ou quando haja de legislar para todo o território nacional ou parte dele que abranja a metrópole e uma ou mais províncias, e o Governo, por meio de decreto-lei, ou, nos casos em que os diplomas se destinem apenas às províncias, por meio de acto do Ministro a quem a lei confira competência especial para o efeito.

§ 2.º Os actos legislativos do Ministro com competência especial para o ultramar revestirão a forma de decreto, promulgado e referendado nos termos constitucionais, podendo adoptarse-se a de diploma legislativo ministerial quando o Ministro estiver a exercer as suas funções em qualquer das províncias ultramarinas e a de portaria nos outros casos previstos na lei.

§ 3.º A competência legislativa ministerial para o ultramar será exercida precedendo parecer de um órgão consultivo adequado, salvo nos casos de urgência, naqueles em que o Ministro esteja a exercer as suas funções em qualquer das províncias ultramarinas e nos demais indicados na lei.

§ 4.º A vigência nas províncias ultramarinas de qualquer diploma publicado pelo Governo depende da menção de que devem ser publicados no Boletim Oficial da província ou províncias onde haja de executar-se.

§ 5.º É indeclinável dever do governador, em cada uma das províncias ultramarinas, sustentar os direitos de soberania da Nação e promover o bem da província, em harmonia com os princípios consignados na Constituição e nas leis.

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art. 137.º A Constituição poderá ser revista de dez em dez anos¹, contados desde a data da última lei de revisão, tendo para esse efeito poderes constituintes a Assembleia Nacional cujo mandato abranger o último ano do decénio ou as que se lhe seguirem até ser publicada a lei de revisão.

§ 1.º A revisão constitucional pode ser antecipada de cinco anos se, a partir do início da sessão legislativa correspondente ao último ano do quinquénio, assim for deliberado por dois terços dos Deputados em exercício efectivo.

Também neste caso o decénio se conta desde a data da lei de revisão que então for votada.

§ 2.º **Apresentada uma proposta ou projecto de revisão constitucional, quaisquer outros só poderão ser apresentados no prazo de trinta dias, a contar da data daquela apresentação.**

§ 3.º Não podem ser admitidos com objecto de deliberação propostas ou projectos de revisão constitucional que não definam precisamente as alterações projectadas.

§ 4.º Os projectos de revisão constitucional devem ser subscritos por um mínimo de dez e um máximo de quinze Deputados em exercício efectivo.

§ 5.º Uma vez publicada a lei de revisão, cessam os poderes constituintes da Assembleia Nacional.

Art. 138.º Independentemente do preceituado no artigo anterior, quando o bem público imperiosamente o exigir, e depois de ouvido o Conselho de Estado, pode o Presidente da República, em decreto assinado por todos os Ministros:

1.º Determinar que a Assembleia Nacional a eleger assuma poderes constituintes e reveja a Constituição em pontos especiais indicados no respectivo decreto;

2.º Submeter a plebiscito nacional as alterações da Constituição que se refiram à função legislativa ou seus órgãos, vigorando as alterações aprovadas logo que o apuramento definitivo do plebiscito seja publicado no «Diário do Governo».

Art. 139.º A lei determinará como hão-de ser substituídos os órgãos da soberania e quais as condições da sua actividade, quando, em estado de necessidade e para salvaguarda do livre exercício do poder ante inimigo externo, não possam funcionar ou actuar livremente.

Art. 140.º Para execução do § único do artigo 53.º será adoptado um regime de transição, com as restrições temporárias julgadas indispensáveis.

Art. 141.º Enquanto não estiver concluída a organização corporativa da Nação serão adoptadas formas transitórias de realizar o princípio de representação orgânica estabelecido no título V da parte I.

¹ A Constituição foi aprovada pelo Plebiscito Nacional de 19 de Março de 1933, entrou em vigor em 11 de Abril do mesmo ano e foi modificada pelas Leis n.ºs 1885, 1910, 1945, 1963, 1966, 2009 2048, 2100 e 3/71, respectivamente de 23 de Março e 23 de Maio de 1935, 21 de Dezembro de 1936, 18 de Dezembro de 1937, 23 de Abril de 1938, 17 de Setembro de 1945, 11 de Junho de 1951, 29 de Agosto de 1959 e 16 de Agosto de 1971.

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

Art. 142.º As leis e decretos com força de lei que foram ou vierem a ser publicados até à primeira reunião da Assembleia Nacional continuam em vigor e ficam valendo como leis no que explícita ou implícitamente não seja contrário aos princípios consignados nesta Constituição.

Art. 143.º As leis e decretos-leis referidos no artigo anterior podem, porém, ser revogados por decretos regulamentares em tudo que se refira à organização interna dos serviços e não altere a situação jurídica dos particulares ou o estatuto dos funcionários.

§ único. As restrições constantes deste artigo não abrangem as leis e decretos-leis que preceituem o que neles constitui matéria legislativa, nem o que está exceptuado por força do § 1.º do artigo 70.º e do artigo 93.º

I — ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À ÚLTIMA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA REPÚBLICA PORTUGUESA

«DIARIOS DAS SESSÕES» DA ASSEMBLEIA NACIONAL (X Legislatura)

- Proposta do Governo: 2.º suplemento ao n.º 50.
- Projecto do deputado Sá Carneiro e outros: Suplemento ao n.º 59.
- Projecto do deputado Duarte do Amaral e outros: 2.º suplemento ao n.º 59.
- Parecer da Câmara Corporativa: 4.º suplemento ao n.º 88.
- Parecer da Comissão Eventual da Assembleia Nacional: N.º 101.
- Discussão na Assembleia Nacional:
 - a) na generalidade: N.ºs 102 a 113.
 - b) na especialidade: N.ºs 113 a 119.
- Texto da Comissão de Legislação e Redacção da Assembleia Nacional: N.º 128.

«DIARIOS DO GOVERNO»

- Lei de revisão n.º 3/71, de 16/8/71: N.º 192, I série.
- Nova publicação da Constituição Política da República Portuguesa: N.º 198, I série.

II — ÍNDICE DOS ANTECEDENTES MAIS PRÓXIMOS DA ÚLTIMA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA REPÚBLICA PORTUGUESA

«DIARIOS DAS SESSÕES» DA ASSEMBLEIA NACIONAL

Revisão de 1951 (V Legislatura).

- Propostas do Governo:
 - a) de alteração da Constituição Política: N.º 70.
 - b) de revisão do Acto Colonial: N.º 70.

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

- Projecto do deputado Joaquim Mendes do Amaral * : N.º 91.
- Projecto do deputado Carlos Moreira e outros: N.º 85.
- Projecto do deputado Cancela de Abreu: N.º 93.
- Pareceres da Câmara Corporativa:
 - a) sobre a proposta de lei do Governo de alteração da Constituição Política: N.º 74.
 - b) sobre a proposta de lei do Governo de revisão do Acto Colonial: N.º 70.
 - c) sobre os projectos apresentados pelos deputados: N.º 98 e suplemento.
- Discussão na Assembleia Nacional:
 - a) na generalidade: N.º 91 a 97.
 - b) na especialidade: N.º 98 a 106.
- Texto da Comissão de Legislação e Redacção da Assembleia Nacional: N.º 106.

Revisão de 1959 (VII Legislatura).

- Proposta do Governo: N.º 86.
- Projecto do deputado Carlos Lima: N.º 89.
- Projecto do deputado Duarte do Amaral: N.º 90.
- Projecto do deputado Homen de Melo: N.º 90.
- Projecto do deputado Afonso Augusto Pinto: N.º 90.
- Projecto do deputado Carlos Moreira e outros: N.º 91.
- Projecto do deputado Duarte Silva: N.º 91.
- Projecto do deputado Cortês Pinto e outros: N.º 91.
- Projecto do deputado Cerqueira Gomes: N.º 91.
- Pareceres da Câmara Corporativa:
 - a) sobre a proposta do Governo: N.º 93.
 - b) sobre os projectos apresentados pelos deputados: N.º 109.
- Discussão na Assembleia Nacional:
 - a) na generalidade: N.ºs 110 a 123.
 - b) na especialidade: N.ºs 124 a 132.
- Texto da Comissão de Legislação e de Redacção da Assembleia Nacional: 3.º suplemento ao n.º 132.

Última revisão da Lei Orgânica do Ultramar Português¹

(VIII legislatura) — 1963.

- Proposta do Governo: N.º 81.
- Parecer da Câmara Corporativa: N.º 85.

* — Não chegou a ser discutido nem mereceu Parecer da Câmara Corporativa.

¹ Vidé, também, Volume 11.º da «Nova Legislação Ultramarina», Agência-Geral do Ultramar, 1963, onde constam o parecer do Conselho Ultramarino (pp. 9 a 20) e a exposição do Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina, Prof. Dr. J. M. da Silva Cunha, feita à Comissão Eventual da Assembleia Nacional (pp. 171 a 190).

EL NUEVO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA

— Discussão na Assembleia Nacional:

- a) na generalidade: N.ºs 89 a 94.
- b) na especialidade: N.ºs 95 a 99.

— Texto da Comissão de Legislação e de Redacção da Assembleia Nacional: 2.º suplemento ao n.º 99.

«DIARIOS DO GOVERNO»

- Lei de revisão n.º 2048, de 11/6/51: Suplemento ao n.º 117, I série.
- Lei de revisão n.º 2100, de 29/8/59: N.º 198, I série.
- Lei n.º 2119, de 24/6/63, que promulga as alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português: N.º 147, I série.
- Nova publicação da Lei Orgânica do Ultramar Português: N.º 150, I série.

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS

BIMESTRAL

Director: Luis LEGAZ Y LACAMBRA
Secretario: Miguel Angel MEDINA MUÑOZ
Secretario adjunto: Emilio SERRANO VILLAFANE

SUMARIO DEL NUM. 179 (septiembre-octubre 1971)

Estudios:

- Manuel ALONSO OLEA: "Sobre la alienación" (1.ª parte).
Jorge USCATESCU: "Sindicalismo y política".
Germán PRIETO ESCUDERO: "La burguesía, beneficiaria de las amortizaciones".
José Luis BERMEJO: "El Seudo-Aristóteles en el pensamiento político español".

Notas:

- Marcos GUIMERÁ: "La región y Canarias".
Emilio SERRANO VILLAFANE: "Concepciones y métodos jurídicos tradicionales y algunas corrientes del pensamiento contemporáneo".

Mundo hispánico:

- Salvador M. DANA MONTAÑO: "Las tentativas de revisión constitucional en la República Argentina".

Crónica:

- Manuel SOLANA SANZ: "Tercer coloquio internacional de Bucarest sobre la seguridad y cooperación europeas".

Sección bibliográfica:

Recensiones.—Noticias de libros.—Revista de revistas.

PRECIOS DE SUSCRIPCION ANUAL

España	300 pesetas
Portugal, Hispanoamérica y Filipinas	556 "
Otros países	626 "
Número suelto, España	100 "
Número suelto, extranjero	139 "

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España)

REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA

CUATRIMESTRAL

ESTUDIOS, JURISPRUDENCIA, CRONICA ADMINISTRATIVA, DOCUMENTOS Y
DICTAMENES, BIBLIOGRAFIA

Consejo de Redacción:

Presidente: Luis JORDANA DE POZAS

Manuel ALONSO OLEA, Juan I. BERMEJO GIRONÉS, José María BOQUERA OLIVER, Antonio CARRO MARTÍNEZ, Manuel F. CLAVERO ARÉVALO, Rafael ENTRENA CUESTA, José A. GARCÍA-TREVIJANO FOS, FERNANDO GARRIDO FALLA, Ricardo GÓMEZ-ACEBO SANTOS, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Ramón MARTÍN MATEO, LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Alejandro NIETO, Manuel PÉREZ OLEA, Fernando SAINZ DE BUJANDA, José Luis VILLAR PALASÍ

Secretario: Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA

Secretario adjunto: José Ramón PARADA VÁZQUEZ

SUMARIO DEL NUM 66

(Septiembre-diciembre 1971)

ESTUDIOS:

- G. VIGNOCCHI: «Planes reguladores y planificación urbanística en el Derecho italiano».
J. M. CORDERO TORRES: «El régimen de las Reales Academias».
J. R. PARADA VÁZQUEZ: «El principio de plenitud de jurisdicción de los Tribunales Penales en el enjuiciamiento de los actos y Reglamentos de la Administración».

JURISPRUDENCIA:

I. Comentarios monográficos

M. F. CLAVERO ARÉVALO: «La quiebra de la pretendida unidad jurisdiccional en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración».

II. Notas

- 1) Conflictos jurisdiccionales (L. MARTÍN-RETORTILLO).
- 2) Contencioso-administrativo:
 - A) En general (JUAN PRATS).
 - B) Personal (R. ENTRENA CUESTA).
 - C) Tributario (J. GARCÍA AÑOVEROS).

CRONICA ADMINISTRATIVA:

I. España

«Las medidas excepcionales en el ordenamiento constitucional español» (F. Sosa WAGNER).

II. Extranjero

«La reforma municipal francesa» (V. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ DE PRADA).

BIBLIOGRAFIA:

- I. Recensiones y noticias de libros.
- II. Revista de revistas.

PRECIO DE SUSCRIPCION ANUAL:

	Pesetas
España	300
Portugal, Iberoamérica, Filipinas	417
Otros países	487
Número suelto Extranjero	191
Número suelto España	130

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS
Plaza de la Marina Española, 8. — MADRID-13 (España)

REVISTA DE POLITICA SOCIAL

TRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA

Eugenio PÉREZ BOTIJA (†).	Héctor MARAVALL CASESNOVES.
Gaspar BAYÓN CHACÓN.	María PALANCA (†).
Luis BURGOS BOEZO (†).	Miguel RODRÍGUEZ PIÑERO.
Efrén BORRAJO DACRUZ.	Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Marcelo CATALÁ RUIZ.	Mariano UCELAY REPOLLES.
Miguel FAGOAGA.	

Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL NUMERO 91 (Julio-septiembre 1971)

ENSAYOS:

Philippe DE SEYES: «Declaración a la sesión correspondiente al año 1971 de la Comisión de Desarrollo Social».

Antonio MARTÍN VALVERDE: «Interposición y mediación en el Contrato de Trabajo». (Análisis del Decreto 3677/70, de 17 de diciembre.)

Gonzalo DIÉGUEZ: *Sobre la obediencia del trabajador.*

María V. CASTILLO DAUDI: «El régimen jurídico del personal al servicio de las Embajadas españolas en el extranjero».

CRONICAS:

Crónica nacional, por Luis LANGA.

Crónica internacional, por Miguel FAGOAGA.

Actividades de la OIT, por C. FERNÁNDEZ.

JURISPRUDENCIA:

«La media hora de comida en la jornada continuada de ocho horas», por Carlos RODRÍGUEZ DEVESA.

Jurisprudencia administrativa, por José PÉREZ SERRANO.

Jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo, por Arturo NÚÑEZ SAMPER.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por José Antonio UCELAY DE MONTERO.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, por Ignacio DURÉNDEZ SÁEZ.

RECENSIONES:

INDICE DE REVISTAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL:

	Pesetas
España	200
Portugal, Iberoamérica y Filipinas	348
Otros países	417
Número suelto Extranjero	139
Número suelto España	80

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS

Plaza de la Marina Española, 8, — MADRID-13 (España)

REVISTA DE ECONOMIA POLITICA

CUATRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: Rodolfo ARGAMENTERÍA GARCÍA

Francisco GARCÍA LAMIQUIZ, Carlos GIMÉNEZ DE LA CUADRA, José GONZÁLEZ PAZ, Carlos CAVERO BEYARD, José ISBERT SORIANO, Julio JIMÉNEZ GIL

Secretario: Ricardo CALLE SAIZ

SUMARIO DEL NUMERO 58 (Mayo-agosto de 1971)

ENSAYOS:

- R. CAMPOS: «La cibernética como instrumento de análisis económico».
A. FERNÁNDEZ DÍAZ: «El modelo Heskcher-Ohlin».
V. P. GANDI: «“La ley de Wagner sobre gasto público” ¿la confirman los recientes trabajos empíricos?».
L. C. THURON: «La distribución de la renta como un bien público puro».
P. A. DIAMOND y J. A. MIRLESS: «Imposición óptima y producción pública».
E. LANGA: «La economía de USA vista a través de la OCDE».

DOCUMENTOS.

RESEÑAS DE LIBROS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL:

	Pesetas
Suscripción anual España	250
Suscripción Iberoamérica y Filipinas	348
Suscripción otros países	417
Número suelto España	100
Número suelto Extranjero	156

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS

Plaza de la Marina Española, 8. — MADRID-13 (España)

Ultimas novedades publicadas por el Instituto de Estudios Políticos

LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Por P. H. J. M. HOUBEN. (Colección «Temas Europeos». 1969, 377 páginas.
Formato: 14 × 21 cms.).

Precio: 300 ptas.

- El autor —que forma parte de la Función Permanente de Holanda en las Naciones Unidas— describe en su libro la estructura y el funcionamiento de los Consejos de la C. E. C. A., del Mercado Común del Euratom, el lugar que ocupan en el engranaje de las instituciones Europeas y sus relaciones con los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados Miembros. Este análisis ha sido hecho con una notable precisión y un perfecto conocimiento del tema. Se abordan en esta obra no sólo los poderes que los Tratados de Roma atribuyen al Consejo, sino también los que le ha conferido la práctica que ha aumentado la importancia del Consejo como órgano de decisión.

AYER, 1931-1953.

Por Carlos MARTINEZ DE CAMPOS, Duque de la Torre (Colección Historia Política». Edición 1970, 512 páginas. Formato: 17 × 24 cms.).

Precio: 375 ptas.

- Como continuación al primer volumen publicado bajo este mismo título en 1946, éste que acaba de darse a la luz ofrece al lector una serie de recuerdos, anécdotas y hechos históricos que corresponden a una época histórica de las más decisivas que ha vivido nuestra Patria. Sus páginas ofrecen el pulso de acontecimientos vividos por el autor durante el período de la II República, para entrar de lleno en ese acontecimiento tan decisivo como fue la guerra civil. El período de ésta entre 1936-1939 recoge inéditas instantáneas de unos recuerdos personales, que sin extenderse «más allá del campo y del alcance de unos gemelos de campaña» revelan hechos y circunstancias sobre las cuales hasta ahora nada se había escrito. Sobre ello está una información vivida intensamente desde la Jefatura del Estado Mayor Central. Se trata de narraciones que como muy bien confiesa el autor serán de utilidad para la verdadera historia». En este libro están recogidas misiones militares de tanta importancia como las llevadas a cabo en Suecia, Alemania y Rusia, durante la II Guerra Mundial; las impresiones cuando estuvo mandando el «Campo de Gibraltar» y recuerdos de embajadas y viajes que enriquecen la panorámica de su contenido y que sobre su bella prosa de amena lectura se refleja la sincera expresión de un pensamiento que profesa su gran amor a España y la Milicia.

SOCIOLOGIA DE LA CULTURA MEDIEVAL

Por *Alfred VON MARTIN* (Colección «Civitas». Edición 2.^a 1970, 140 páginas. Formato: 11,5 × 19 cms.).

Precio: 125 ptas.

— Agotada la anterior edición, el Instituto publica este libro de uno de los profesores más agudos e inteligentes de la Universidad alemana. La labor investigadora del autor se orientó preferentemente hacia la sociología de la cultura. La preocupación básica de este libro es la magna cuestión relativa al lugar que en el orden psíquico-espiritual ocupamos en el tiempo histórico y la de saber hasta qué punto se halla socialmente condicionado en la común historia y en el desarrollo sociológico.

Este volumen contiene un breve ensayo sobre Sociología y Sociologismo para posteriormente entrar de lleno en el tema de la «Sociología Medieval» que analiza frente a las críticas depreciativas de la Edad Media, como a la visión romántica de la misma que pretendieron hacer de la Edad Media una «leyenda rosa».

Se trata de un estudio minucioso que debe ser objeto de consulta para quien se sienta interesado en el desarrollo de la cultura medieval, de ese importante período de tránsito entre el mundo cristiano y el mundo moderno.

LAS FUENTES DEL DERECHO INGLES

Por *Carleton KEMP ALLEN* (Colección «Serie Jurídica». Edición 1969. 1054 páginas. Formato: 15,5 × 21 cms.).

Precio: 625 ptas.

— Se trata de un libro altamente especializado, ágil y moderno en su concepción y estilo, que contiene un examen sobre la organización judicial inglesa. Se alude en él a los antecedentes históricos y a las fuentes que han originado el peculiar sistema anglosajón, como mecanismo en la administración de justicia. El libro lleva un estudio preliminar, que permite perfectamente situar al lector español dentro del tema. La traducción está realizada sobre la última versión inglesa de la obra, y enriquecida con una Tabla de Estatutos legales que se usan en Inglaterra, una Tabla de casos que ejemplarizan la aplicación del Derecho, y una copiosa bibliografía, que puede completar en todo momento la cultura jurídica del lector.

REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINION PUBLICA

TRIMESTRAL

Director: Ramón Cercós

CONSEJO DE REDACCIÓN

Alfonso ALVAREZ VILLAR, Juan BENEYTO PÉREZ, José CASTILLO CASTILLO, José CAZORLA PÉREZ, Juan Díez NICOLÁS, Gabriel ELORRIAGA FERNÁNDEZ, Luis GONZÁLEZ SEARA, Alberto GUTIÉRREZ REÑÓN, José JIMÉNEZ BLANCO, Juan J. LINZ S. DE GRACIA, Carmelo LISÓN TOLOSANA, Enrique MARTÍN LÓPEZ, Amando DE MIGUEL RODRÍGUEZ, FRANCISCO MURILLO FERROL, José R. TORREGROSA PERIS, Jorge XIFRA HERAS

Secretario: José SÁNCHEZ CANO

Secretario adjunto: M.^a Teresa SANCHO MENDIZÁBAL

SUMARIO DEL NUMERO 25 (Julio-septiembre 1971)

ESTUDIOS:

G. LEIBHOLZ: «El fenómeno de la burguesía al paso del tiempo».

Alberto RULL SABATER: «Hacia una teoría general de indicadores socioeconómicos y su aplicación a la política social y económica».

Carmelo LISÓN TOLOSANA: «Modulaciones rituales».

Joan F. MIRA CASTERA: «Notas sobre la encuesta sociológica en el estudio de una pequeña comunidad. Una experiencia».

Georges H. MOND: «La situación en Polonia y el hiatus entre la opinión pública y el poder».

José MARQUÉS DE MELO: «Periodismo semanal ilustrado. Estudio comparativo de cinco revistas semanales».

H. J. PRAKKE: «Desarrollo de la ciencia de la publicística y del periódico como ciencia de la comunicación social».

ENCUESTAS E INVESTIGACIONES:

«Problemas del hombre en la gran ciudad».

INFORMACION:

- a) Cuestiones políticas y económicas.
- b) Política interior.
- c) Política social.
- d) Psicología social.
- e) Deportes.

BIBLIOGRAFIA

CONGRESOS Y REUNIONES

SUSCRIPCIONES:

ESPAÑA:

Número suelto 90,— pesetas.

Suscripción anual (4 números) 300,— »

HISPANOAMÉRICA:

Número suelto 1,50 dólares.

Suscripción anual (4 números) 5,50 »

OTROS PAÍSES:

Número suelto 1,75 »

Suscripción anual (4 números) 5,75 »

REDACCION Y ADMINISTRACION: Avenida del Generalísimo, 29. MADRID-16 (España)

ESTUDIOS DE INFORMACION

TRIMESTRAL

Director: Alejandro MUÑOZ ALONSO

Secretario técnico: Ramón ZABALZA RAMOS

Secretario de Redacción: Jesús CABANILLAS MONTEJO

SUMARIO DEL NUMERO 16 (Octubre-diciembre 1970)

ESTUDIOS Y NOTAS:

Información, Derecho y Política, por Jorge XIFRA HERAS.

Las técnicas de distribución de información y las comunicaciones por satélite, por Vicente SAN MIGUEL GARCÍA.

«El Sol»: orígenes y tres primeros años de un diario de Madrid, (I), por Jean Michel DESVOISS.

El cine italiano, por Giulio GELIBTER.

La información ante modos y modas, por Marta PORTAL.

DOCUMENTOS:

1. Situación mundial del papel de periódico.

2. Los franceses juzgan su televisión.

3. Lista de diarios belgas.

SECCION BIBLIOGRAFICA

Se incluyen reseñaciones sobre libros y revistas que tratan de los medios de comunicación de masas.

En el mismo volumen, ANEXO BIBLIOGRAFICO, que incluye como *Estudio bibliográfico* «El pensamiento salvaje de Levi-Strauss», así como reseñaciones y noticias de libros y revistas de las diversas ciencias sociales

REDACCION Y ADMINISTRACION:

Sección de Planificación y Documentación. Secretaría General Técnica. Ministerio de Información y Turismo

Avenida del Generalísimo, 39, 4.ª planta. MADRID-16

PRECIO :

	Número suelto	Suscripción anual (4 números)
España	80 pesetas	300 pesetas
Estudiantes	30 »	100 »
Extranjero	1,5 \$	5,5 \$

Para suscripciones y pedidos dirigirse a: EDITORA NACIONAL

Departamento de Publicaciones Periódicas

Avenida de José Antonio, 63. MADRID-13

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

REVISTA MENSUAL DE CULTURA HISPANICA

Director: José Antonio MARAVALL

Jefe de Redacción: Félix GRANDE

INDICE DE LOS NUMEROS 250-51-52 (Octubre 1970 a enero 1971)

Fernando QUIÑONES: «Retrato».—Carmen BRAVO VILLASANTE: «28 cartas de Galdós a Pereda».—Salvador DE MADARIAGA: «La universalidad de Galdós».—Rodolfo CARDONA: Nuevos enfoques críticos con referencia a la obra de Galdós.—Vicente LLORÉNS: «Historia y novela en Galdós».—Fernando CHUECA GOTTIA: «La ciudad galdosiana».—Pierre E. SALLENAVE: «Notas sobre una lectura política de Galdós».—Peter G. EARLE: «La interdependencia de los personajes galdosianos».—Joaquín CASALDUERO: «Historia y novela. Trayectoria de un conflicto».—Mariano BAQUERO GOYANES: «Perspectivismo irónico en Galdós».—Josette BLANQUAT: «Lecturas de juventud».—Gustavo CORRERA: «Pérez Galdós y la tradición calderoniana».—Antoni JUTGLAR: «Sociedad e Historia en la obra de Galdós».—Carlos SECO SERRANO: «Los "Episodios Nacionales" como fuente histórica».—Albert DÉROZIER: «El "pueblo" de Pérez Galdós en "La Fontana de Oro"».—Leo J. HOAR Jr.: «"Dos de mayo de 1808, dos de septiembre de 1870", por Benito Pérez Galdós; un cuento extraviado y el posible prototipo de sus "Episodios Nacionales"».—Robert RICARD: «Mito, sueño y realidad en "Prim"».—Juan Bautista AVALLE-ARCE: «Zumalacárregui».—Francisco AYALA: «Los narradores en las novelas de "Torquemada"».—Rafael SOTO VERGÉS: «La narrativa galdosiana».—Ricardo GULLÓN: «"Doña Perfecta", invención y mito».—Gerald GILLESPIE: «"Miau": hacia una definición de la sensibilidad de Galdós».—Eamonn RODGERS: «Realismo y mito en "El amigo Manso"».—Luciano GARCÍA LORENZO: «Sobre la técnica dramática de Galdós: "Doña Perfecta". De la novela a la obra teatral».—Donald W. BLEZNICK y MARIO E. RUIZ: «La Benina Misericordiosa: Conciliación entre la filosofía y la fe».—José SCHRAIBMAN: «Las citas bíblicas en "Misericordia", de Galdós».—Emilio MIRÓ: «Tristana o la imposibilidad de ser».—Andrés AMORÓS: «"La sombra": realidad o imaginación».—Walter E. PATTON: «Verdaguer y Nazarín».—Olga KATTAN: «Madrid en "Fortunata y Jacinta" y "La lucha por la vida": dos posturas».—Germán GULLÓN: «Unidad de "El doctor Centeno"».—Willa H. ELTON: «Sobre el género de "La loca de la casa", de Galdós».—E. INMAN FOX: «En torno a "Mariucha": Galdós en 1903».—Jorge RODRÍGUEZ PADRÓN: «Galdós, el teatro y la sociedad de su época».—Andrés NOUCUÉ: «"Antón Caballero", de Benito Pérez Galdós».—José Manuel ALONSO IBARROLA: «Don Benito Pérez Galdós y el cine».—Luis S. GRANJEL: «Personajes médicos en Galdós».—José María LÓPEZ PIÑERO: «La Medicina y la enfermedad en la España de Galdós».—Juan Pedro QUIÑONERO: «Propuestas para una revisión galdosiana».—Carmen BRAVO VILLASANTE: «Polémica en torno a Galdós en la prensa de Santander» ("La Atalaya" contra "El Atlántico" en 1893. "La Atalaya" contra "El Cantábrico" en 1901).—Enrique RUIZ-FORNELLS: «Benito Pérez Galdós y la crítica norteamericana».—Jacinto Luis GUEREÑA: «Galdós en notas concéntricas».—José GARCÍA MERCADAL: «Galdós, Aragón y la ópera "Zaragoza"».—Jack WEINER: «Diario español de Alexander Nikolaevich Vaselovskii (1859-1860)».—Juan SAMBLAYO: «Un año galdosiano».—Luciano GARCÍA LORENZO: «Bibliografía galdosiana».

DIRECCION, ADMINISTRACION Y SECRETARIA:

Instituto de Cultura Hispánica - Avenida de los Reyes Católicos

Teléfono 244 06 00 - MADRID-3



REVISTA DE LA ACTUALIDAD CULTURAL
ESPAÑOLA



NOTICIA Y CRITICA DE LIBROS. LA MAS COMPLETA
INFORMACION EDITORIAL



LITERATURA, PINTURA, MUSICA, TEATRO, CINE



TODAS LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS
Y PREMIOS LITERARIOS

Aparece los días 1 y 15 de cada mes

Suscripción anual: 425 pesetas

LA ESTAFETA LITERARIA

Calle del Prado, 21

MADRID-14

INTERNATIONAL PROBLEMS

The Quarterly of the Israeli Institute of International
Affairs

carries articles in English, French and Hebrew.

From the contents of Issue No. 3-4/1971

1. The USSR-Israel Relations, A. YODFAT and Y. GILBOA.
 2. UN Peace-Keeping on the Suez Canal, A. ETZIONI.
 3. One More Proposal for the Advancement of Peace in the Middle East, M. MUSHKAT.
 4. Two Case Studies of Israeli Foreign Policy in the UN, D. N. ODEN.
 5. The Provisional Nature of the 1949 Armistice Lines, U. NAM.
 6. Armament of Development Countries, P. KODZIC.
 7. China as a Nuclear Power, L. YUEH-YUN LIU.
- Three Books on Africa, S. A. GITELSON.

Annual Subscription \$ 6.

Tel Aviv - P.O.B. 17027 - ISRAEL

C O S M O V I S I O N

DE
Q U I N K

Un bello libro de relatos por uno de los mejores novelistas
venezolanos

Amor, Fantasía, Verismo, Realidades, en un manajo de breves trabajos

Del mismo autor solicite:

«IMAGENES», novela sobre las luchas universitarias en América Latina. Según el novelista Tomás Salvador, «de esos estudiantes pueden salir los futuros guerrilleros o doctorcitos»

EDICIONES MARTE

Galerías Comerciales, 18

Concilio de Trento, D-31

Barcelona-V

EDITORIAL PETRO NAVE

publica tres Revistas de excepcional calidad literaria y técnica:

«AERONAVES»

«BANCA & SEGUROS»

«PETROLEO Y MINERIA DE VENEZUELA»

Únicas en su género en Venezuela

Sin compromiso u obligación solicite ejemplar muestra escribiendo a:

Editorial Petro Nave
Avenida Universidad
Cables: «Petronave»

Edificio Zingg, 221-23
Caracas, Venezuela
Teléfono 42.59.37

FORO INTERNACIONAL

REVISTA TRIMESTRAL PUBLICADA POR EL COLEGIO DE MEXICO

Fundador: DANIEL COSIO VILLEGAS

Director: ROQUE GONZALEZ SALAZAR

Director Adjunto: MARIA DEL ROSARIO GREEN

VOL. XII

OCTUBRE-DICIEMBRE 1971

NUM. 2

INDICE

ARTICULOS

PHILIPPE C.: *Schmitter, Desarrollo retrasado, dependencia externa y cambio político en América Latina.*

DAVID BARKIN: *La estrategia cubana de desarrollo.*

DIMITRIOS A. GERMIDIS: *Los créditos atados: costos adicionales y alternativas ofrecidas en los países beneficiarios.*

NOTA DE INVESTIGACION

ELISABETH E. BRAUN: *La XXV sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas: actitudes y decisiones mexicanas.*

BIBLIOGRAFIA

CECILIA CULEBRA DE SOBERANES: *Bibliografías latinoamericanas: Ciencias sociales.*

RESEÑAS DE LIBROS

LIBROS RECIBIDOS

PRECIO DEL EJEMPLAR \$18.00; Dls. 1.60

SUSCRIPCION ANUAL (4 números) \$60.00; Dls. 6.00

EL COLEGIO DE MEXICO
DEPARTAMENTO DE VENTAS
GUANAJUATO 125,
MEXICO 7, D. F.

Socialización, administración, desarrollo

Por LUIS LEGAZ Y LACAMBRA

Colección de Biblioteca de Cuestiones Actuales. Volumen en rústica de 17 x 25, 152 pp.
Precio 175. Instituto de Estudios Políticos, 1971.

Sobre tres conceptos básicos, el autor recoge en este volumen tres estudios que, aunque escritos en forma independiente, expresan diversos problemas de una misma preocupación.

Los tres trabajos motivados por distintas actividades académicas e intelectuales del profesor Legaz y Lacambra, aparecen aquí unidos y actualizados sin alterar la estructura fundamental que les dio origen.

La socialización es un hecho observable y una estructura subyacente. Tras las distintas ideas socializadoras hay muchos y muy varios problemas que afectan a la adaptación del hombre a su medio social, a la red de organizaciones y asociaciones en la vida humana y a todo un sistema de organización social con los correspondientes medios de producción.

El concepto administración evoca el poder cada vez más absorbente del Estado. No es posible pasar sin la administración hoy gobierno de técnicos, saber práctico como fundamento de la tecnocracia moderna.

La idea del desarrollo supone un proceso analítico de lo que es la sociedad, especialmente observada en su crecimiento económico. El desarrollo pretende alcanzar un tipo de hombre satisfecho, integrado en un grupo quizá socializado.

Es evidente que estos tres estudios tienen una temática unitaria, su planteamiento filosófico jurídico. El autor no duda en aceptar las consecuencias de un planteamiento iusnaturalista para explicar estos tres conceptos y mantenerse fiel a una trayectoria que viene marcando desde hace muchos años su vida universitaria como catedrático de Filosofía del Derecho.

El libro actual sobre temas que interesan a todos, porque son en el fondo problemas de la sociedad contemporánea.



80 pesetas

